

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Decimoquinta Reunión del Comité de Expertos
Del 14 al 18 de septiembre de 2009
Washington, DC

OEA/Ser.L.
SG/MESICIC/doc.242/09 rev. 4
18 septiembre 2009
Original: español

REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 18 de septiembre de 2009)

**COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIÓN**

**INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ DE
LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER
ANALIZADAS EN LA TERCERA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES FORMULADAS A DICHO PAÍS EN LAS RONDAS ANTERIORES^{1/}**

INTRODUCCIÓN

1. Contenido del Informe

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis de la implementación en la República del Perú de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fueron seleccionadas por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Tercera Ronda de Análisis. Dichas disposiciones son las siguientes: artículo III, párrafos 7 y 10; y artículos VIII, IX, X y XIII.

[2] En segundo lugar, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a Perú por el Comité de Expertos del MESICIC en las rondas anteriores, las cuales se encuentran contenidas en los informes que en relación con dicho país han sido adoptados por el citado Comité, los cuales se encuentran publicados en las siguientes páginas en “Internet”: www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_per.pdf y www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf.

2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo

[3] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República del Perú depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 4 de junio de 1997.

[4] Asimismo, la República del Perú suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de junio de 2001.

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

1. Respuesta de la República del Perú

[5] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República de Perú en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma. La República del Perú envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos pueden consultarse en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

[6] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República del Perú en su respuesta del día 2 de abril de 2009; la que le fue solicitada a este país por la Secretaría y por los

1. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 18 de septiembre de 2009, en el marco de su Decimoquinta Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 14 al 18 de septiembre de 2009.

integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones,² de acuerdo con el Reglamento y Normas de Procedimiento; y la que le fue aportada por el mismo en virtud de lo previsto en dicho Reglamento y en la Metodología para el Análisis.

2. Documentos recibidos de organizaciones de la sociedad civil

[7] El Comité también recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Tercera Ronda, un documento de la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, que le fue remitido por vía electrónica por dicha organización.³

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA TERCERA RONDA

1. NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS⁴ POR PAGOS QUE SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[8] La República del Perú cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, entre las que cabe destacar las siguientes:

[9] - La Constitución Política de 1993, que en su artículo 74 dispone que los tributos “*se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo*” y que no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación a dicho artículo. Asimismo, el artículo 79 establece que las “*leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas*”.

[10] - El Decreto Supremo N° 135-99-EF de 1999 (*Texto Único Ordenado del Código Tributario*), que en su norma IV (b) también dispone que sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios.

[11] El Decreto Supremo anterior establece en su artículo 50 la competencia de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para la administración de tributos internos y de los derechos arancelarios. Por su parte, el artículo 62 dispone que el ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios; dicho artículo enumera las facultades discrecionales que la Administración Tributaria puede utilizar para tal efecto. Asimismo, el

2. En el proceso de elaboración de este informe se realizó una videoconferencia entre los expertos peruanos y mexicanos quienes pudieron intercambiar información de forma directa, práctica que innova la metodología del mecanismo y sin duda abre el espacio para un mejor proceso de levantamiento y verificación de información. El Comité toma nota de esta práctica y alienta su continuación en la elaboración de los futuros informes.

3. Este documento se recibió el 2 de abril de 2009 y se encuentra disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

4. Para efectos del presente informe el Comité de Expertos del MESICIC ha considerado como beneficio tributario toda exoneración impositiva y cualquier concepto deducible de la determinación de la base imponible de la renta y otros, que determinen reducciones favorables al monto impositivo de los contribuyentes.

artículo 108 señala que después de la notificación de sus actos, la Administración Tributaria podrá revocar, modificar, sustituir o complementar los mismos, entre otros, en los casos de connivencia entre el personal de la Administración Tributaria y el deudor tributario; y, cuando la Administración detecte que se han presentado circunstancias posteriores a su emisión que demuestran su improcedencia.

[12] - El Decreto Supremo N° 179-04-EF de 2004 (*Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta*), que en sus artículos 18 y 19 establece las inafectaciones y exoneraciones al impuesto a la renta,⁵ y en su artículo 37 dispone que, para establecer la renta neta de tercera categoría,⁶ “(...) *se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente,*⁷ *así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley (...)*”, en consecuencia son deducibles, entre otros, “*los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, los gastos preoperativos originados por la expansión de las actividades de la empresa y los intereses devengados durante el período preoperativo, a opción del contribuyente, podrán deducirse en el primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de diez (10) años*” (artículo 37, inciso g); y “*los gastos de representación propios del giro o negocio, en la parte que, en conjunto, no exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, con un límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias*” (artículo 37, inciso q). Esta Ley, enlista además, en su artículo 44, las deducciones no admitidas, entre las cuales, la prevista en su inciso j), referida a “*los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago*”⁸.

[13] El artículo 52 señala además que “*se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por éste. Los incrementos patrimoniales no podrán ser justificados con:* a) *Donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en escritura pública o en otro documento fehaciente. b) Utilidades derivadas de actividades ilícitas. c) El ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente sustentado. d) Los ingresos percibidos que estuvieran a disposición del deudor tributario pero que no los hubiera dispuesto ni cobrado, así como los saldos disponibles en cuentas de entidades del sistema financiero nacional o del extranjero que no hayan sido retirados. e) Otros ingresos, entre ellos, los provenientes de préstamos que no reúnan las condiciones que señale el reglamento*”.

[14] - El Decreto Supremo N° 122-94-EF de 1994 (*Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta*), que en su artículo 21, inciso m), desarrolla el inciso g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y prevé que se consideran gastos de representación propios del giro del negocio: Los efectuados por la empresa con el objeto de ser representada fuera de sus oficinas, locales o establecimientos y los gastos destinados a presentar una imagen que le permita mantener o mejorar su posición de mercado, incluidos los obsequios y agasajos a clientes. Asimismo, dicho artículo dispone que no se encuentran comprendidos en el concepto de gastos de representación, los gastos de viaje y las erogaciones dirigidas a la masa de consumidores reales o potenciales, tales como los gastos de propaganda y que la deducción de los gastos procederá en la medida en que aquéllos se encuentren acreditados fehacientemente

5. Ver también los artículos 7-9 del Decreto Supremo N° 122-94-EF (Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta).

6. Rentas del comercio, la industria y otras expresamente consideradas por la Ley (Artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Ver también el artículo 28 de dicha ley).

7. El artículo 37, último párrafo, del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta prevé, en relación con esta disposición, lo siguiente: “*Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, éstos deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l) y ll) de este artículo; entre otros*”.

8. Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT.

mediante comprobantes de pago que den derecho a sustentar costo o gasto y siempre que pueda demostrarse su relación de causalidad con las rentas gravadas.

[15] - El Decreto Legislativo N° 813 de 1996 (*Ley Penal Tributaria*), que en su artículo 4 dispone que “*La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 8 (ocho) ni mayor de 12 (doce) años y con 730 (setecientos treinta) a 1460 (mil cuatrocientos sesenta) días-multa cuando: a) se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos (...)*”; y en su artículo 6, prevé que en los delitos de defraudación tributaria, además de las penas allí previstas se deberá incluir la inhabilitación no menor de seis meses ni mayor de siete años, para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria.

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[16] En lo que hace relación a las disposiciones relativas a la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, que ha examinado el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas conforman en su conjunto un cuerpo armónico de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención.

[17] En ese sentido, el Comité toma nota de que la República del Perú, en su respuesta al cuestionario, indica lo siguiente:

[18] “*En estricto la normatividad tributaria no contiene disposiciones específicas que prevean la negativa o el impedimento para el goce de beneficios tributarios a los sujetos involucrados en actos de corrupción. En tanto la declaratoria de ingresos por actos de corrupción implicaría la confesión de delitos que serían sancionados por nuestro ordenamiento jurídico nacional*”.⁹

[19] No obstante lo anterior, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener beneficios tributarios (ver recomendación 1.4., inciso a) del capítulo II de este informe).

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[20] Con respecto a los resultados, la respuesta de la República del Perú al cuestionario señala que: “*En cuanto a las consultas formuladas en los literales b) y c) debe señalarse que como las mismas están condicionadas a la existencia en la normatividad tributaria de disposiciones específicas que prevean la negativa o el impedimento para el goce de beneficios tributarios a los sujetos involucrados en actos de corrupción, no existiendo las mismas (tal como se ha señalado en la respuesta a la primera pregunta), carece de objeto pronunciarse sobre las interrogantes formuladas en los referidos literales*”.¹⁰

[21] El Comité, en atención a que no cuenta con información adicional a la antes mencionada, que le permita hacer una valoración integral de los resultados en esta materia, le formulará una recomendación

9. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 1, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

10. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 4, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

al país analizado para que, a través de las autoridades tributarias que tienen a su cargo la tramitación de las solicitudes de beneficios tributarios y las demás autoridades u órganos que ejerzan competencias al respecto, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma (ver recomendación 1.4., inciso b) del capítulo II de este informe).

1.4. Conclusiones y recomendaciones

[22] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el país analizado de la disposición prevista en el artículo III, 7 de la Convención, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[23] La República del Perú ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.

[24] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República del Perú considere la siguiente recomendación:

[25] Fortalecer las normas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción. Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas:

- a) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener beneficios tributarios, tales como las siguientes (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe):
 - i. Manuales, guías o lineamientos que las orienten acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisión de dichas solicitudes, para que puedan cerciorarse de que las mismas reúnen los requisitos establecidos, verificar la veracidad de la información en ellas suministrada, y constatar el origen del gasto o pago en el que se fundamenten.
 - ii. Posibilidad de acceder a las fuentes de información necesarias para llevar a cabo la verificación y constatación antes aludidas, incluyendo la petición de información a entidades financieras.
 - iii. Programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de información cuando lo requiera el cumplimiento de su función.
 - iv. Mecanismos de coordinación institucional que les permitan obtener oportunamente la colaboración que necesiten de otras autoridades, en aspectos tales como dictámenes de autenticidad de los documentos aportados con las solicitudes.
 - v. Programas de capacitación diseñados específicamente para alertarlas sobre las modalidades utilizadas para disfrazar pagos por corrupción e instruir las sobre la manera de detectar dichos pagos en las solicitudes.

vi. Canales de comunicación que les permitan poner oportunamente en conocimiento de quienes deben decidir sobre el otorgamiento de los beneficios solicitados las anomalías que detecten o cualquier irregularidad que pueda incidir en el sentido de la decisión (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).

b) Seleccionar y desarrollar, a través de las autoridades tributarias que tienen a su cargo la tramitación de las solicitudes de beneficios tributarios y las demás autoridades u órganos que ejerzan competencias al respecto, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe).

2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN)

2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[26] La República del Perú cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, entre las que cabe destacar las siguientes:

[27] - El *Código de Comercio* de 1902, el cual es aplicable a todo tipo de sociedades mercantiles, que en su artículo 33 obliga a los comerciantes a mantener registros contables de sus operaciones, los cuales deberán ser llevados con la intervención de contadores titulados públicos o mercantiles (artículo 35).

[28] Los artículos 37 y 38 expresan que debe constar en los mismos toda operación relativa a la enajenación y adquisición de activos, al igual que la relación exacta de todas las deudas y obligaciones pendientes, así como del dinero, valores, créditos, efectos al cobro, bienes muebles e inmuebles, mercaderías y efectos de todas clases, que constituyan su activo.

[29] El artículo 43 dispone que los libros deberán ser llevados con claridad, por orden de fechas, sin blancos, interpolaciones, raspaduras, ni enmiendas, y sin presentar señales de haber sido alteados sustituyendo o arrancando los folios o de cualquiera otra manera. A su vez, el artículo 44 expresa que las aclaraciones o correcciones a que haya lugar a los libros deberán hacerse constar mediante anotaciones expresas.

[30] El artículo 45 prohíbe la pesquisa de oficio por juez, tribunal o cualquier autoridad para inquirir si los comerciantes llevan sus libros con arreglo a las disposiciones del *Código*, así como la investigación o examen general de la contabilidad en las oficinas o escritorios de los comerciantes.ⁱ

[31] El artículo 49 establece que los registros contables de las empresas deben conservarse hasta cinco años después de la liquidación de todos sus negocios y dependencias mercantiles.

[32] - El Decreto Ley N° 26002 de 1992 (*Ley del Notariado*), que en sus artículos 112 al 116 regula la legalización de apertura de libros.

[33] - La Ley N° 26887 de 1997 (*Ley General de Sociedades*), la cual es aplicable a todo tipo de sociedades mercantiles y asociaciones, que en su artículo 223 establece que los estados financieros de las sociedades anónimas se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país.ⁱⁱ

[34] Los artículos 221 y 224 disponen que los estados financieros de las sociedades anónimas deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideración de la junta obligatoria anual y que a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria a la junta general, cualquier accionista de una sociedad anónima puede obtener en las oficinas de la sociedad, en forma gratuita, copias de los estados financieros y de los demás documentos indicados en el artículo 221.

[35] El artículo 226 prevé que el pacto social, el estatuto o el acuerdo de junta general, adoptado por el diez por ciento de las acciones suscritas con derecho de voto, pueden disponer que la sociedad anónima tenga auditoría externa anual, cuyos auditores serán nombrados anualmente y presentarán su informe a la junta general conjuntamente con los estados financieros. A su vez, el artículo 227 expresa que en las sociedades que no cuentan con auditoría externa permanente, los estados financieros son revisados por auditores externos, por cuenta de la sociedad, si así lo solicitan accionistas que representen no menos del diez por ciento del total de las acciones suscritas con derecho a voto o los accionistas titulares de acciones sin derecho a voto, mediante comunicación escrita a la sociedad.

[36] - El Decreto Supremo N° 135-99-EF de 1999 (*Texto Único Ordenado del Código Tributario*), que en su artículo 87, párrafo 4, dispone que los deudores tributarios deben llevar libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, registrando las actividades u operaciones que se vinculen con la tributación conforme a lo establecido en las normas pertinentes; y que constituye infracción tributaria relacionada con la obligación de llevar libros y registros, el llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes los mencionados libros y registros, respectivamente.

[37] El artículo, párrafo 7, establece como obligación del deudor tributario conservar los libros y registros, llevados en sistema manual, mecanizado o electrónico, así como los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén relacionadas con ellas mientras el tributo no esté prescrito; y que el deudor tributario deberá comunicar a la Administración Tributaria, en un plazo de quince (15) días hábiles, la pérdida, destrucción por siniestro, asaltos y otros, de los libros, registros, documentos y antecedentes.

[38]- El Decreto Supremo N° 135-99-EF de 1999 (*Texto Único Ordenado del Código Tributario*), que en su artículo 62 señala que la SUNAT podrá exigir a los deudores tributarios la exhibición de sus libros y registros contables y documentación que los sustenten, los mismos que deberán ser llevados de acuerdo con las normas correspondientes.

[39]- La Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT, que en su artículo 12 determina que para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta, los libros y registros que integran la contabilidad completa son los siguientes: a) Libro Caja y Bancos; b) Libro de Inventarios y Balances; c) Libro Diario.

d) Libro Mayor; e) Registro de Compras; f) Registro de Ventas e Ingresos. La información mínima que debe contener cada uno de estos libros y registros se encuentra establecida en el artículo 13.¹¹ Asimismo, la supresión, destrucción u ocultamiento de documentos se encuentra tipificada en el artículo 430.

11. Por medio de la Resolución de Superintendencia N° 017-2009/SUNAT, se encuentra suspendida temporalmente desde el 25 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009, la aplicación del artículo 13° de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT con excepción de lo dispuesto en el inciso 5-A y en el numeral 13.4 del citado artículo.

[40] - La Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, que en sus artículos 8 al 10 establece los requisitos y características de los comprobantes de pago.

[41] - La Ley No. 26126 de 1992 (*Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV*), que en su artículo 2 le atribuye a la CONASEV, entre otras, las funciones de estudiar, promover y reglamentar el mercado de valores y controlar a las personas naturales y jurídicas que intervienen en dicho mercado [artículo 2, inciso a)]; velar por la transparencia de los mercados de valores [artículo 2, inciso d)]; supervisar el cumplimiento de la Ley General de Sociedades por las sociedades anónimas abiertas a que hace referencia el capítulo III del título IX del Decreto Legislativo No. 755 [artículo 2, inciso i)]; dictar las normas para elaborar y presentar los estados financieros individuales y consolidados y cualquier otra información complementaria, cuidando que reflejen razonablemente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de las empresas y entidades comprendidas dentro del ámbito de supervisión, de acuerdo con las normas contables vigentes en el país, así como controlar su cumplimiento [artículo 2, inciso k)]; y vigilar la actuación de las sociedades auditoras designadas por las personas naturales o jurídicas sometidas a su supervisión, impartirles normas sobre el contenido de sus dictámenes y requerirles cualquier información o antecedente relativo al cumplimiento de sus funciones [artículo 2, inciso l)].

[42] El artículo 253 establece que la CONASEV está encargada de supervisar y controlar a la sociedad anónima abierta. Asimismo, el mismo artículo señala que CONASEV goza, entre otras, de la atribución de exigir la presentación de información financiera de las sociedades anónimas abiertas y de determinar las infracciones a la *Ley General de Sociedades* y a las normas que dicte CONASEV, así como imponer las sanciones correspondientes.

[43]- La Resolución CONASEV N° 055-2001-EF/94.10 de 2001, señala en su artículo 8 que el órgano facultado para imponer sanciones según lo establecido en la normativa, así como dictar medidas correctivas, es el Tribunal Administrativo de CONASEV.

[44] Los artículos 19 al 22 establecen las sanciones en el Mercado de Valores, las cuales son distintas para las infracciones consideradas leves,ⁱⁱⁱ graves^{iv} y muy graves^v.

[45]- La Resolución CONASEV N° 103-1999-EF/94.10 de 1999¹² (*Reglamento de Información Financiera y Manual para la Preparación de Información Financiera*), aplicable a las sociedades anónimas abiertas, que contiene las normas que deben observar las empresas en la preparación y presentación de la información financiera, con el objeto de que dicha información reúna las cualidades mínimas de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.¹³

[46] - La Ley 28708 de 2006 (*Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad*), que en su artículo 4 establece como objetivos del Sistema Nacional de Contabilidad (SNC), entre otros, lo de armonizar y homogeneizar la contabilidad en los sectores público y privado mediante la aprobación de la normatividad contable; en su artículo 5 dispone que hacen parte del SNC, entre otros, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública (DNCP), órgano rector del sistema, y el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC); en su artículo 14 señala que la DNCP y el CNC, en el ámbito de sus competencias, dictan y aprueban normas y procedimientos contables aplicables en los sectores público y privado, respectivamente; en su artículo 15 atribuye a la DNCP el desarrollo de las acciones necesarias para la difusión, capacitación y permanente actualización de las normas y procedimientos contables vigentes; y

12. Modificado por la Resolución de Gerencia General de CONASEV N° 010-2008-EF/94.01.2.

13. Ver nota final ii.

en su artículo 16.3 determina que las entidades del sector privado efectuarán el registro contable de sus transacciones con sujeción a las normas y procedimientos dictados y aprobados por el CNC.

[47] - La Ley N° 28951 de 2007 (*Ley de Actualización de la Ley N° 13523, de Profesionalización del Contador Público y de Creación de los Colegios de Contadores Públicos*), que en su artículo 2 determina que es obligatoria la colegiación para el ejercicio profesional del contador público.

[48] El artículo 5 establece entre los fines de los Colegios de Contadores Públicos el de velar por el respeto y cumplimiento de las normas de ética profesional. Asimismo, el artículo 10 señala que las infracciones al Código de Ética, al estatuto, al reglamento interno o a las resoluciones emanadas de los órganos institucionales, cometidas por los contadores públicos colegiados, serán sancionadas de acuerdo a su estatuto.

[49] - El Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos del Perú que en su artículo 12 expresa que el Contador Público Colegiado tiene la obligación de guardar el secreto profesional y de no revelar por ningún motivo los hechos, datos o circunstancias de los que tenga conocimiento en el ejercicio de su profesión, excepto aquella información requerida por las autoridades jurisdiccionales competentes por mandato de la Ley.

[50] El artículo 46 identifica los actos que implican en el descrédito para la profesión,^{vi} mientras que los artículos 47 y 48 determinan los actos que consisten infracción grave a la ética y dignidad profesional. Asimismo, el artículo 50 dispone que el contador público colegiado que infrinja el Código de Ética será sancionado por el Colegio a que pertenezca y la sanción será aplicada de acuerdo con la gravedad de la violación cometida, pudiendo consistir en amonestación verbal; amonestación escrita; suspensión temporal en el ejercicio de la profesión entre uno y veinticuatro meses; y expulsión y cancelación definitiva de la matrícula en el Registro del respectivo Colegio de Contadores Públicos (artículos 51 y 52).

[51]- El Decreto Legislativo N° 635 de 1991 (*Código Penal del Perú*) que en su artículo 199 tipifica la contabilidad paralela en los siguientes términos: “*El que, con la finalidad de obtener ventaja indebida, mantiene contabilidad paralela distinta a la exigida por la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a noventa días-multa*”.

[52] - El Decreto Legislativo N° 813 de 1996 (*Ley Penal Tributaria*), que en su artículo 5 dispone que: “*Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa, el que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros y registros contables: a) Incumpla totalmente dicha obligación; b) No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros contables; c) Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y registros contables; d) Destruya u oculte total o parcialmente los libros y/o registros contables o los documentos relacionados con la tributación*”.

[53] Asimismo, el Estado analizado también cuenta con disposiciones, medidas y mecanismos en la materia, con diferentes contenidos y alcances, en relación con el control de otras agencias y entidades financieras, como las contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores (Decreto supremo N° 93-2002) y la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N° 26702 de 1996).

2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas.

[54] En lo que hace relación a las disposiciones constitucionales y legales relativas a la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, que ha examinado el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas conforman un conjunto de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención.

[55] No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones acerca de la conveniencia de que el Estado analizado considere complementar, desarrollar y adecuar ciertas previsiones sobre la materia.

[56] En primer lugar, sin perjuicio de que la *Ley General de Sociedades* establece la posibilidad de auditoría externa para las sociedades anónimas abiertas en sus artículos 226 y 227, el Comité observa que, con base en la información que tuvo a su disposición, no existe la obligación de que las sociedades mercantiles o asociaciones de cualquier tipo que en desarrollo de su objeto social celebren contratos con el Estado, con otros Estados, o con entidades nacionales o extranjeras que cuenten con participación estatal en su patrimonio, cuenten con controles contables internos adecuados a su naturaleza, como lo establece el artículo III, 10 de la Convención. El Comité estima útil, además, que se considere la utilización de pautas o guías para la realización de las auditorías internas tendientes a detectar anomalías o actos de corrupción y que se establezca la obligación de las personas y contadores responsables de asentar los registros contables y de los auditores internos cuando detecten anomalías, de ponerlas en conocimiento del representante legal y los socios (en las sociedades) o miembros (en las asociaciones) y denunciarlas ante las autoridades competentes en caso de que puedan constituir delito. El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendación 2.4, incisos a) y b) del capítulo II de este informe).

[57] En segundo lugar, el Comité estima necesario que el país analizado considere adoptar, a través de los medios que estime apropiados, las medidas pertinentes para que el “secreto profesional” no sea un obstáculo para que los profesionales cuyas actividades estén reguladas por el Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos, puedan poner en conocimiento de las autoridades competentes los actos de corrupción que detecten en desarrollo de su labor. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4., inciso c) del capítulo II de este informe).

[58] En tercer lugar, el Comité estima que sería conveniente que el país analizado considerara promover la capacitación a las personas responsables de asentar los registros contables y de dar cuenta de su exactitud, incluyendo la concientización acerca de la importancia de observar las normas expedidas para garantizar la veracidad de dichos registros y las consecuencias de su violación. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4., inciso d) del capítulo II de este informe).

[59] En cuarto lugar, el Comité estima que sería útil para el país analizado considerar realizar campañas de concientización y de promoción de la integridad destinadas al sector privado, al igual que considerar adoptar medidas tales como elaboración de manuales y guías que orienten a las empresas sobre las buenas prácticas que deban ser implementadas para prevenir la corrupción. (ver recomendación 2.4., inciso e) del capítulo II de este informe).

[60] En quinto lugar, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros

contables, a detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de dichos registros (ver recomendación 2.4., inciso f) del capítulo II de este informe).

2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[61] En la sección de resultados de la respuesta de la República del Perú al cuestionario, el Estado analizado informa que *“Debe señalarse que como la misma [la pregunta del cuestionario] está condicionada a la existencia en la normatividad tributaria de normas que establezcan específicamente disposiciones destinada a impedir o disuadir el soborno de funcionarios [sic] públicos nacionales y extranjeros, no existiendo las mismas (tal como se ha señalado en la respuesta a la pregunta anterior), carece de objeto pronunciarse sobre la interrogante formulada en el referido literal”*,¹⁴ e incluye además información relacionada a la Corporación FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado).¹⁵

[62] Sobre el particular, el Comité nota que la información remitida por la República del Perú se refiere a la existencia de normas de control interno de empresas estatales, y no incluye resultados específicos sobre la prevención o detección del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.

[63] A su vez, en el documento de la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” se anota lo siguiente: *“en torno al tema tributario, la SUNAT no ha presentado estadísticas sobre esta materia, lo que es una falencia que esta entidad debe cubrir a la brevedad posible”*.¹⁶ El documento de PROETICA también incluye información sobre resultados de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de lavado de activos, los cuales no son específicos sobre el tema analizado.

[64] El Comité, en atención a que no cuenta con información adicional a la antes mencionada, procesada de tal manera que le permita hacer una valoración integral de los resultados en esta materia, le formulará una recomendación al país analizado para que, a través de los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables y de velar porque las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones obligadas a establecer controles contables internos lo hagan en debida forma, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma (ver recomendación 2.4, inciso g) del capítulo II de este informe).

2.4. Conclusiones y recomendaciones

[65] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el país analizado de la disposición prevista en el artículo III, 10 de la Convención, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

14. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 4, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

15. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 5, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

16. Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p.10, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

[66] La República del Perú ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo II de este informe.

[67] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República del Perú considere la siguiente recomendación:

[68] - Fortalecer las normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Para cumplir con esta recomendación, la República del Perú podría tener en cuenta las siguientes medidas:

- a) Adoptar las medidas pertinentes para establecer la obligación de que las sociedades mercantiles o asociaciones de cualquier tipo que en desarrollo de su objeto social celebren contratos con el Estado, con otros Estados, o con entidades nacionales o extranjeras que cuenten con participación estatal en su patrimonio, cuenten con controles contables internos, adecuados a su naturaleza, como lo establece el artículo III, 10 de la Convención, y considerar la utilización de pautas o guías para la realización de las auditorías internas tendientes a detectar anomalías o actos de corrupción (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- b) Tomar las medidas que sean necesarias a los fines establecer la obligación de las personas y contadores responsables de asentar los registros contables y de los auditores internos para que, cuando detecten anomalías, ponerlas en conocimiento del representante legal y los socios en las sociedades, o miembros en las asociaciones, y denunciarlas ante las autoridades competentes en caso de que puedan constituir delito (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- c) Adoptar, conforme a su ordenamiento jurídico, a través de los medios que estime apropiados, las medidas pertinentes para que el “secreto profesional” no sea un obstáculo para que los profesionales cuyas actividades estén reguladas por el Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos, puedan poner en conocimiento de las autoridades competentes los actos de corrupción que detecten en desarrollo de su labor (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- d) Promover la capacitación a las personas responsables de asentar los registros contables y de dar cuenta de su exactitud, incluyendo la concientización acerca de la importancia de observar las normas expedidas para garantizar la veracidad de dichos registros y las consecuencias de su violación (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- e) Considerar realizar campañas de concientización y de promoción de la integridad destinadas al sector privado y considerar adoptar medidas tales como elaboración de manuales y guías que orienten a las empresas sobre las buenas prácticas que deban ser implementadas para prevenir la corrupción (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- f) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables, a detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de dichos registros, tales como las siguientes (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe):

- i. Tácticas de investigación, como seguimiento de pagos, cruces de información, cruces de cuentas y peticiones de información a entidades financieras, con el fin de establecer la ocurrencia de tales pagos.
 - ii. Manuales, guías o lineamientos que orienten a los órganos o instancias de control que aún no las tengan acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisión de los registros contables para detectar sumas pagadas por corrupción.
 - iii. Programas informáticos que permitan acceder fácilmente a la información necesaria para verificar la veracidad de los registros contables y de los comprobantes con los que éstos se fundamenten.
 - iv. Mecanismos de coordinación institucional que permitan a dichos órganos o instancias obtener fácil y oportunamente de parte de otras instituciones o autoridades la colaboración que necesiten para verificar la veracidad de los registros contables y de los comprobantes con los que éstos se fundamenten o establecer su autenticidad.
 - v. Programas de capacitación para los funcionarios de los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables, diseñados específicamente para alertarlos sobre las modalidades utilizadas para disfrazar a través de dichos registros pagos por corrupción e instruirlos sobre la manera de detectarlos.
- g) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables y de velar porque las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones obligadas a establecer controles contables internos lo hagan en debida forma, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe (ver sección 2.3 del capítulo II de este informe).

3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN)

3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[69] La República del Perú cuenta con la siguiente disposición relativa al soborno transnacional:

[70] - La Ley N° 29316 de 2009 (*Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América*), mediante la cual se incorpora al Código Penal del Perú, el artículo 397-A, referido al cohecho activo transnacional (soborno transnacional), que expresa: “*El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario de organismo internacional público donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor o funcionario público realice u omita actos propios de su cargo o empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años*”.

[71]- El Código Penal Peruano, que en su artículo 105 establece: *“Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez deberá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes:*

[72] *1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no excederá de cinco años.*

[73] *2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité.*

[74] *3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años.*

[75] *4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.*

[76] *La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal no será mayor de cinco años.*

[77] *Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenará a la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores de la persona jurídica hasta por un período de dos años.*

[78] *El cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria, no impedirá la aplicación de estas medidas”.*

[79] Asimismo, el artículo 27 del Código Penal señala que *“El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí en la representada”.*

3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[80] En lo que hace relación a la disposición mediante la cual la República del Perú ha tipificado la figura penal relativa al soborno transnacional prevista en el artículo VIII de la Convención, que ha examinado el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse que la misma es pertinente para la promoción de los propósitos de la Convención.

[81] No obstante lo anterior, el Comité toma nota de que el país analizado ha considerado clarificar lo que debe entenderse por la expresión *funcionario o servidor público de otro Estado* (ver recomendación 3.4., inciso a) del capítulo II de este informe).

3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[82] Con respecto a los resultados, la respuesta de la República del Perú al cuestionario señala que: *“Al ser una norma reciente no se cuenta con información”*.¹⁷

17. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 8, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

[83] El Comité, en atención a que no cuenta con información adicional a la antes mencionada y teniendo en cuenta que la norma penal que tipifica el delito de soborno transnacional ha sido aprobada recientemente (el 14 de enero de 2009), le formulará una recomendación al país analizado para que a través de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o juzgar el delito de soborno transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia (ver recomendación 3.4, inciso b) del capítulo II de este informe).

3.4. Conclusiones y recomendaciones

[84] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el país analizado de la disposición prevista en el artículo VIII de la Convención, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[85] La República del Perú ha adoptado medidas relativas al delito de soborno transnacional previsto en el artículo VIII de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este informe.

[86] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República del Perú considere las siguientes recomendaciones:

- a) Continuar evaluando la posibilidad de clarificar la expresión *funcionario o servidor público de otro Estado* (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- b) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o juzgar el delito de soborno transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia (ver sección 3.3 del capítulo II de este informe).

4. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCION)

4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[87] La República del Perú cuenta con la siguiente disposición relativa a enriquecimiento ilícito:

[88] - La Ley N° 28355 de 2004 (*Ley que modifica diversos artículos del código penal y de la ley penal contra el lavado de activos*), mediante la cual se modifica el artículo 401 del Código Penal del Perú, referido al enriquecimiento ilícito, que expresa:

[89] “*El funcionario o servidor público^{vii} que ilícitamente incrementa su patrimonio, respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar razonablemente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.*

[90] *Si el agente es un funcionario público que haya ocupado cargos de alta dirección en las entidades u organismos de la administración pública o empresas estatales, o esté sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la pena será no menor de ocho ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.*

[91] *Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita”.*

4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[92] En lo que hace relación a la disposición mediante la cual la República del Perú ha tipificado la figura penal relativa al enriquecimiento ilícito prevista en el artículo IX de la Convención, que ha examinado el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse que la misma es pertinente para la promoción de los propósitos de la Convención.

[93] No obstante lo anterior, el Comité observa que el tipo penal de enriquecimiento ilícito dispuesto en el artículo 401 del Código Penal del Perú contiene un elemento adicional que no se encuentra en el artículo IX de la Convención: que el incremento en el patrimonio del funcionario o servidor público haya sido obtenido “ilícitamente”. Ello parecería indicar que se debe probar no solamente que hubo un aumento del patrimonio del funcionario respecto de sus ingresos legítimos pero también el origen ilícito de dicho incremento patrimonial, o sea el delito de enriquecimiento ilícito sería una consecuencia de delitos como el cohecho pasivo, la concusión, entre otros.

[94] En ese sentido, el Pleno Jurisdiccional Nacional Penal,¹⁸ celebrado el 21 de junio de 2008,¹⁹ ha llegado a las siguientes conclusiones en relación al tipo penal de enriquecimiento ilícito tal como se encuentra dispuesto en el artículo 401 del Código Penal del Perú:

[95] Para la determinación del tipo penal de enriquecimiento ilícito, “(...) *es necesaria la configuración de una relación de causalidad [entre el enriquecimiento y la posición del funcionario público], toda vez que por la naturaleza del ilícito, el funcionario debe haber hecho uso de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio”.*

[96] “*El Ministerio Público debe probar que el funcionario público se ha enriquecido ilícitamente, en el periodo que tuvo dicha condición”.*

[97] En atención a lo anterior, el Comité estima útil que el país analizado considere, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptar las medidas pertinentes para adecuar el artículo 401 del Código Penal del Perú a la conducta de enriquecimiento ilícito descrita en el artículo IX de la Convención, de tal manera que se elimine en el mismo el elemento “ilícitamente” previsto en dicho artículo. El Comité le formulará una recomendación en este sentido al país analizado (ver recomendación 4.4., inciso a) del capítulo II de este informe).

4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[98] En la sección de resultados de la respuesta de la República del Perú al cuestionario, el Estado analizado presenta datos expuestos por la Ministra de Justicia en el Congreso de la República del Perú el

18. De acuerdo con el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Perú: “*Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial”.*

19 http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/..%5C.%5CCorteSuprema%5Ccij%5Cdocumentos%5CConclusiones_Pleno_Jurisdiccional_Nacional_Penal_010708.pdf

2008, relacionados con los procesos penales en giro de las procuradurías anticorrupción descentralizadas.²⁰

[99] Sobre el particular, el Comité nota que la información remitida por la República del Perú se refiere a los delitos de peculado, corrupción de funcionarios, concusión, abuso de autoridad y otros, pero no incluye datos específicos sobre los procesos penales en relación con el delito de enriquecimiento ilícito.

[100] Finalmente, el Comité, en atención a que no cuenta con información adicional a la antes mencionada, procesada de tal manera que le permita hacer una valoración integral de los resultados en esta materia, le formulará una recomendación al país analizado para que a través de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o juzgar el delito de enriquecimiento ilícito, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma (ver recomendación 4.4, inciso b) del capítulo II de este informe).

4.4. Conclusiones y recomendaciones

[101] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el país analizado de la disposición prevista en el artículo IX de la Convención, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[102] La República del Perú ha adoptado medidas relativas al delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo IX de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II de este informe.

[103] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República del Perú considere las siguientes recomendaciones:

- a) Adecuar, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, el artículo 401 del Código Penal del Perú que se relaciona con la conducta de enriquecimiento ilícito descrita en el artículo IX de la Convención de tal manera que se elimine en el mismo el elemento “ilícitamente” previsto en dicho artículo (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- b) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o juzgar el delito de enriquecimiento ilícito, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia (ver sección 4.3 del capítulo II de este informe).

20. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 11-12, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

5. NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN)

5.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[104] La República del Perú tipificó como delito la figura del soborno transnacional, prevista en el artículo VIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción, con posterioridad a la fecha en la que ratificó dicha Convención y notificó dicha tipificación al Secretario General de la OEA, mediante Nota N° 7-5-M/258 de la Representación Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, de fecha 18 de mayo de 2009, la cual informa que mediante la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009, se ha incorporado en el Código Penal Peruano la figura del “cohecho activo internacional” o “soborno internacional”.

[105] Asimismo, la República del Perú tipificó como delito la figura del enriquecimiento ilícito, prevista en el artículo IX de la Convención Interamericana contra la Corrupción, con anterioridad a la fecha en la que ratificó dicha Convención.

5.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[106] Con respecto a la notificación de la tipificación del soborno transnacional y del enriquecimiento ilícito, la respuesta de la República del Perú al cuestionario señala que:

[107] *“Con relación al delito de enriquecimiento ilícito, cabe señalar que el Perú ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción el 06 de abril de 1997, siendo que desde el 08 de abril de 1991, fecha en que salió publicado el Código Penal, está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico la figura del enriquecimiento ilícito, bajo el artículo 401, el mismo que fue modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28355, publicada el 06 de octubre de 2004”.*²¹

[108] Teniendo en cuenta que la República del Perú tipificó como delito la figura del soborno transnacional, prevista en el artículo VIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción, con posterioridad a la fecha en la que ratificó dicha Convención y que en mayo de 2009 notificó dicha tipificación al Secretario General de la OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo X de la misma, el Comité no le formulará ninguna recomendación al respecto.

[109] Igualmente, teniendo en cuenta que la República del Perú tipificó como delito la figura del enriquecimiento ilícito, prevista en el artículo IX de la Convención Interamericana contra la Corrupción, con anterioridad a la fecha en la que ratificó dicha Convención, no se requiere que efectué la notificación contemplada en el artículo X de la misma, y por tal razón el Comité no le formulará ninguna recomendación al respecto.

5.3. Conclusiones

[110] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, el Comité concluye que la República del Perú ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo X de la Convención.

21. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 8, disponible en:
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN)

6.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[111] La República del Perú cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la extradición, entre las que cabe destacar las siguientes:

[112] - La Constitución Política de 1993, que en su artículo 37 expresa que *“La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad (...)”*.

[113] - El Decreto Legislativo N° 957 de 2004 (*Nuevo Código Procesal Penal*), que en su artículo 508 dispone: *“1. Las relaciones de las autoridades peruanas con las extranjeras y con la Corte Penal Internacional en materia de cooperación judicial internacional²² se rigen por los Tratados Internacionales celebrados por el Perú y, en su defecto, por el principio de reciprocidad en un marco de respeto de los derechos humanos. 2. Si existiere tratado, sus normas regirán el trámite de cooperación judicial internacional. Sin perjuicio de ello, las normas de derecho interno, y en especial este Código, servirán para interpretarlas y se aplicarán en todo lo que no disponga en especial el Tratado”*.

[114] El artículo 517 establece las causales de denegación de la extradición y no se incluye, entre ellas, la prohibición de la extradición de nacionales.

[115] Asimismo, el artículo 523 detalla el procedimiento relacionado con el arresto provisorio o la pre-extradición.^{viii}

[116] - Los tratados de extradición vigentes suscritos por Perú con Chile, México, Ecuador, Estados Unidos de América, Panamá, Paraguay, Brasil y Argentina.²³

6.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[117] En lo que hace relación a las disposiciones relativas a la extradición, que ha examinado el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas conforman en su conjunto un cuerpo armónico de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención.

[118] No obstante lo anterior, el Comité estima necesario que en virtud de lo previsto en el artículo XIII, párrafo 6 de la Convención, el país analizado considere adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al que le deniegue una solicitud de extradición relativa a los delitos tipificados de conformidad con la Convención, porque se ha considerado competente, acerca del resultado final del caso que como consecuencia de dicha denegación haya presentado ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento (ver recomendación 6.4., inciso a) del capítulo II del presente informe).

22. El inciso a) del artículo 511 del Nuevo Código Procesal Penal incluye a la extradición como un acto de cooperación judicial internacional.

23. Los textos de los tratados bilaterales en materia de extradición firmados por Perú se encuentran disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/mla/sp/per/index.html>

6.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[119] En el acápite de la respuesta de la República del Perú al cuestionario, relativo a resultados en esta materia, se expresa lo siguiente:

[120] *“Según datos del Ministerio de Justicia del Perú desde el año 2004 al año 2008 se han solicitado 102 solicitudes de extradición en delitos relacionados a corrupción, utilizando tratados bilaterales, así como instrumentos internacionales que facilitan la cooperación y asistencia judicial como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia penal, entre otros”.*²⁴

[121] Asimismo, en el anexo a su respuesta,²⁵ Perú presenta información sobre el estado de trámite de las solicitudes de extradición formuladas entre los años 2004 y 2008 a otros Estados Parte, tales como Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos de América y Panamá, relacionadas con los actos de corrupción tipificados en la legislación peruana de conformidad con la Convención.

[122] Perú informa, además, que no ha recibido ninguna solicitud de extradición por casos de corrupción desde la creación, en Febrero de 2006, de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación (UCJIE).²⁶

[123] El Comité considera que la información a la que se ha hecho alusión en este acápite del presente informe sirve para demostrar que el país analizado ha buscado activamente la cooperación internacional para que regresen al País aquellos acusados de actos de corrupción que se encuentren fuera de su territorio nacional a manera de que puedan ser juzgados por sus Cortes Nacionales. Sin embargo, la información no se encuentra detallada lo suficiente para saber en cuales ocasiones se han apoyado en la Convención Interamericana contra la Corrupción para fundamentar los casos.

[124] Con base en lo anterior, el Comité le formulará una recomendación al país analizado para que a través de los órganos o instancias encargadas de los trámites de solicitudes de extradición activa y pasiva, pueda desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, que permitan presentar información sobre la utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción como base jurídica para las solicitudes de extradición formuladas a otros Estados Parte, así como datos sobre los trámites realizados para atender las solicitudes que con el mismo propósito le hayan formulado otros Estados Parte a la Convención (ver recomendación 6.4, inciso b) del capítulo II de este informe).

[125] Finalmente, el Comité estima que sería útil que el país analizado considere adoptar las medidas que estime apropiadas para beneficiarse de una mayor utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción en los casos de extradición, las cuales podrían consistir, entre otras, en la implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para las autoridades judiciales y administrativas con competencias en esta materia (ver recomendación 6.4., inciso c) del capítulo II del presente informe).

24. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 20, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

25. Ver los anexos a la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 6-18, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

26. Respuesta emitida por vía electrónica el 25 de mayo de 2009 a solicitud de información de la Secretaría Técnica sobre el particular.

6.4. Conclusiones y recomendaciones

[126] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el país analizado de la disposición prevista en el artículo XIII de la Convención, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[127] **La República del Perú ha adoptado medidas relativas a la extradición prevista en el artículo XIII de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 6 del capítulo II de este informe.**

[128] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República del Perú considere las siguientes recomendaciones:

- a) Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al que le deniegue una solicitud de extradición relativa a los delitos tipificados de conformidad con la Convención, porque se ha considerado competente, acerca del resultado final del caso que como consecuencia de dicha denegación haya presentado ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento (ver sección 6.2 del capítulo II de este informe).
- b) Desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, que permitan presentar información sobre la utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción como base jurídica para las solicitudes de extradición formuladas a otros Estados Parte (ver sección 6.2 del capítulo II de este informe).
- c) Adoptar las medidas que estime apropiadas para beneficiarse de una mayor utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción en los casos de extradición, las cuales podrían consistir, entre otras, en la implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para las autoridades judiciales y administrativas con competencias en esta materia (ver sección 6.3 del capítulo II de este informe).

III. OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LAS RONDAS ANTERIORES

PRIMERA RONDA

[129] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República del Perú en el informe de la Primera Ronda, sobre las que no informó en su respuesta a la sección II del cuestionario de la Segunda Ronda acerca de avances en su implementación, o sobre las que habiendo informado, el Comité consideró en el apartado IV del informe de dicha ronda que requerían atención adicional, y con base en la información que ha tenido a su disposición, referida a nuevos avances en su implementación realizados con posterioridad a tal informe, lo siguiente:

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCION)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación 1.1.1:

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses.

Medida sugerida por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:²⁷

- b) Reglamentar el Código de Ética de la Función Pública, regulando las sanciones que correspondan por la contravención de sus normas, entre las cuales, las relativas a conflictos de intereses, y precisando la manera en que se aplicarían sus disposiciones en concurrencia con otras normas sobre la materia, procurando que no se vea disminuido su ámbito de aplicación (ver sección 1.1.2 del capítulo II de este informe).*

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:²⁸

- a) Analizar las posibles situaciones de conflicto de intereses que podrían derivarse de la autorización constitucional (artículos 92 y 126 de la Constitución Política), que permite que un Congresista pueda ser designado Ministro de Estado, y que lo faculta a intervenir en votaciones en el Congreso, siendo recomendable que se abstenga en aquellas materias relacionadas directamente con su función ejecutiva.*
- c) Evaluar la posibilidad de modificar la Disposición Complementaria y Final Primera de la Ley 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, a fin de eliminar su carácter supletorio en el caso de normas de menor jerarquía.*
- d) Fortalecer la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Pública, otorgándole una mayor autonomía y dotándola de mayores instrumentos jurídicos y recursos para el cumplimiento de sus funciones, entre las cuales, las que inciden en la prevención de conflictos de intereses (ver sección 1.1.2 del capítulo II de este informe).*
- e) Implementar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido previsto en la Ley 27444 de 2001, de tal manera que sea una herramienta útil para la consecución de sus objetivos, entre los cuales, procurar que las funciones públicas sean desempeñadas por personas pulcras; valiéndose para esto de nuevas tecnologías que permitan su actualización y faciliten su consulta oportuna por parte de sus usuarios.*

27. Ver página 27 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

28 Ver páginas 26-28 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

- f) *Establecer como procedimiento para la determinación de la habilidad laboral (artículo 7, ordinal b, Ley 28175 de 2004) la consulta previa al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.*
- g) *Definir con claridad los requisitos técnicos y profesionales que deberán poseer, para cada puesto de trabajo, quienes son designados para ejercer cargos de confianza (Ley 28175 de 2004, artículo 4, ordinal 2).*
- h) *Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos sobre las normas de conducta relativas a conflictos de intereses, y para resolver las consultas de los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y actualización periódica con relación a dichas normas.*
- i) *Realizar evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en Perú, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.*

[130] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda que estima está relacionada con la medida a) de la anterior recomendación.²⁹

[131] El Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida a) de la recomendación anterior.³⁰

[132] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida c) de la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.

[133] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[134] *“Esta norma no ha sido modificada por el Congreso de la República ni se ha presentado proyecto de Ley alguno sobre la materia, por lo que esta medida no ha sido implementada”.*^{31 32}

29. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 22, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

30. El Estado analizado informó en sus observaciones al proyecto de informe preliminar sobre Perú correspondiente a la tercera ronda de análisis que “*en cuanto a posibles conflictos de interés debe tenerse en cuenta que las normas peruanas no han considerado – como lo sugiere el Comité de Expertos- prohibiciones de votación a los parlamentarios ministros, cuando se traten de asuntos relacionados con su sector administrativo, en razón que de hacerlo se generarían desequilibrios en la representación por contarse con menos votos en el Congreso*”.

31. Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 19, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

32. El Estado analizado informó en sus observaciones al proyecto de informe preliminar sobre Perú correspondiente a la tercera ronda de análisis que “*no obstante, y a efectos de subsanar todos los problemas relacionados a la gestión del servicio civil en el Perú, se ha creado la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR, entidad rectora que tiene como una de sus tareas principales la elaboración de una nueva Ley del Servicio Civil que unifique todos los regímenes de contratación que hay en el Estado*”.

[135] Con respecto a la medida d) de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda:

[136] *“Sobre el fortalecimiento de la Comisión de Nacional de Lucha contra la corrupción debemos indicar que dicha Comisión fue desactivada en agosto de 2008 con el Decreto Supremo N° 057-2008-PCM, en tanto estas labores han sido asumidas directamente por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de sus órganos de línea respectivos”.*³³

[137] Asimismo, en respuesta a una solicitud de información adicional sobre dichos cambios institucionales, la República del Perú informó lo siguiente:

[138] *“Debe anotarse que los cambios institucionales en el Perú han sido motivados por conflictos de competencias entre organismos constitucionalmente autónomos como el Poder Judicial y el Ministerio Público con las Oficina Nacional Anticorrupción, en ese sentido y a efectos de corregir estas dificultades se asignó a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública la responsabilidad de conducir políticas preventivas de la corrupción como la ética en la función pública, transparencia, acceso a la información y vigilancia ciudadana, como eje importante del proceso general de Reforma del Estado que conduce el Estado peruano. Por su parte todas aquellas políticas de carácter punitivo o de castigo a la corrupción son responsabilidad de organismos constitucionalmente autónomos y diferentes a las labores del Poder Ejecutivo.*

[139] *Es necesario decir que la Presidencia del Consejo de Ministros es la entidad administrativa de mayor rango en el Poder Ejecutivo Peruano cuya función es coordinar las políticas generales del gobierno. En atención a esta condición se le ha asignado la labor de monitoreo general de la política nacional de lucha contra la corrupción, y del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, manteniendo relaciones y coordinaciones con todas las entidades responsables del Poder Ejecutivo, así como con los organismos constitucionalmente autónomos como son el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Contraloría General de la República, entre otros.”*

[140] Con respecto a la medida d), el Comité toma nota del cambio institucional informado por el país analizado y por la sociedad civil,³⁴ cuyo resultado ocasiona que la Comisión a la que se refiere tal medida no exista en la actualidad. Sin embargo, teniendo a la vista la información proporcionada por el Estado relacionada con las competencias de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Comité estima que esta recomendación ha sido considerada satisfactoriamente.

[141] Con respecto a las medidas e) y f) de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda, de la cual el Comité destaca, como un paso que le permite estimar que las mismas han sido consideradas satisfactoriamente, la siguiente medida:

33. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 22, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

34. Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 20, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

[142] ▪ La adopción de la Resolución Ministerial No. 017-2007-PCM, con la cual se aprobó la Directiva para el uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD.^{35, 36}

[143] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de las medidas *e)* y *f)* de la recomendación anterior, en lo atinente a la adopción de la Resolución Ministerial No. 017-2007-PCM, sin entrar a efectuar un análisis del fondo de su contenido.

[144] Con respecto a la medida *h)* de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la implementación de la misma, la siguiente medida:

[145] ▪ La creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a través del Decreto Legislativo N° 1023 del 21 de Junio del 2008, la cual tiene entre sus funciones la capacitación de los recursos humanos de todo el Estado.³⁷

[146] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida *h)* de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, para lo cual espera que puedan superar las dificultades que para su implementación ha puesto de presente en su respuesta.^{ix} Asimismo, el Comité toma nota de la información suministrada sobre los organismos internos que han participado en su implementación.³⁸

[147] Finalmente, debido a que la respuesta de la República del Perú al Cuestionario no se refirió a las medidas *g)* e *i)* de la recomendación anterior, el Comité toma reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a su implementación.

1.2. Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación 1.2.1:

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto al control de los recursos de la administración pública.

35. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 22, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

36. En el informe de la Segunda Ronda, el Comité tomó nota de que la República del Perú había presentado la Resolución Ministerial No. 017-2007-PCM después del plazo para la presentación de la respuesta al cuestionario, debido a que había entrado en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial EL PERUANO, el 20 de enero de 2007. Por esa razón no se efectuó un análisis de fondo sobre esta norma en aquella oportunidad. Ver nota al final xxvii de este informe, disponible en

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

37. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 22, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

38. Respuesta de la República del Perú al Cuestionario de la Tercera Ronda, p. 7. Son ellos: El Congreso de la República y la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Medida sugerida por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:³⁹

- a) *Reglamentar el Código de Ética de la Función Pública, regulando las sanciones que correspondan por la contravención de sus normas, entre las cuales, las relativas a la protección de los recursos públicos, y precisando la manera en que se aplicarían sus disposiciones en concurrencia con otras normas sobre la materia, procurando que no se vea disminuido su ámbito de aplicación (ver sección 1.2.2 del capítulo II de este informe).*

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:⁴⁰

- b) *Fortalecer la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Pública, otorgándole una mayor autonomía y dotándola de mayores instrumentos jurídicos y recursos para el cumplimiento de sus funciones, entre las cuales, las que inciden en la protección de los recursos públicos (ver sección 1.2.2 del capítulo II de este informe).*
- c) *Implementar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido previsto en la Ley 27444 de 2001, de tal manera que sea una herramienta útil para la consecución de sus objetivos, entre los cuales, procurar que los recursos públicos sean administrados por personas pulcras; valiéndose para esto de nuevas tecnologías que permitan su actualización y faciliten su consulta oportuna por parte de sus usuarios.*
- d) *Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos sobre las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos, y para resolver las consultas de los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y actualización periódica con relación a dichas normas.*
- e) *Realizar evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en el Perú, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.*
- f) *Optimizar la utilización de la tecnología existente con el objeto de diseñar un sistema informatizado, de carácter público, de compras, contrataciones y recursos del Estado.*
- g) *Incorporar, en la instancia de elaboración de bases para licitaciones y compras públicas, normas que habiliten a los potenciales oferentes y a distintos actores de la sociedad civil a formular observaciones al proyecto de bases posibilitando la incorporación de opiniones que puedan incluirse en las bases definitivas, trámite éste que deberá cumplir con requisitos de amplia publicidad y difusión.*

39. Ver página 30 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

40. Ver páginas 28-30 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

- h) *Tener en cuenta, con respecto a la publicidad de las convocatorias de bases para licitaciones y concursos públicos, un mayor número de medios de difusión, tales como Internet, Asociaciones, Colegios, Cámaras u otros entes que sirvan de núcleo a empresas proveedoras o profesionales vinculados al objeto de que se trata, sin perjuicio de los medios habitualmente utilizados como el Diario Oficial El Peruano y los diarios de mayor circulación, nacional o local.*
- i) *Incorporar en las páginas web de todas las entidades públicas información sobre su presupuesto, finanzas, ejecución del gasto y personal, conforme a lo establecido por el Decreto de Urgencia No. 035-2001 (ver sección 4.2.1, penúltimo párrafo, del capítulo II de este informe).*

[148] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda con respecto a la medida b) de la anterior recomendación:

[149] *“Sobre el fortalecimiento de la Comisión de Nacional de Lucha contra la corrupción debemos indicar que dicha Comisión fue desactivada en agosto de 2008 con el Decreto Supremo N° 057-2008-PCM, en tanto estas labores han sido asumidas directamente por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de sus órganos de línea respectivos”.*⁴¹

[150] Con respecto a la medida b), el Comité toma nota del cambio institucional informado por el país analizado y por la sociedad civil,⁴² cuyo resultado ocasiona que la Comisión a la que se refiere tal medida no exista en la actualidad. Sin embargo, teniendo a la vista la información proporcionada por el Estado relacionada con las competencias de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (ver párrafos 138 y 139 *supra*), el Comité estima que esta recomendación ha sido considerada satisfactoriamente.

[151] Con respecto a la medida c) de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda, de la cual el Comité destaca, como un paso que le permite estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, la siguiente medida:

[152] ▪ La adopción de la Resolución Ministerial No. 017-2007-PCM, con la cual se aprobó la Directiva para el uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD.^{43, 44}

41. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 22, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

42. Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 20, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

43 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 25, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

44 En el informe de la Segunda Ronda, el Comité tomó nota de que la República del Perú había presentado la Resolución Ministerial No. 017-2007-PCM después del plazo para la presentación de la respuesta al cuestionario, debido a que había entrado en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial EL PERUANO, el 20 de enero de 2007. Por esa razón no se efectuó un análisis de fondo sobre esta norma en aquella oportunidad. Ver nota al final xxvii de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_per.pdf

[153] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida *c)* de la recomendación anterior, en lo atinente a la adopción de la Resolución Ministerial No. 017-2007-PCM, sin entrar a efectuar un análisis del fondo de su contenido.

[154] Con respecto a la medida *d)* de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación de la misma, las siguientes medidas:

[155] ▪ La elaboración del Proyecto de Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025 sobre Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público, que será prepublicado antes de su aprobación para que la sociedad civil organizada o cualquier ciudadano, pueda manifestar sus aportes.⁴⁵

[156] ▪ La creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a través del Decreto Legislativo N° 1023 del 21 de Junio del 2008, la cual tiene entre sus funciones la capacitación de los recursos humanos de todo el Estado.⁴⁶

[157] ▪ La elaboración y prepublicación del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades que articula la oferta formativa de las diferentes entidades públicas con las necesidades de los empleados públicos y que tiene entre sus objetivos específicos la promoción de una gestión pública orientada a la rendición de cuentas a fin de lograr una gestión transparente.⁴⁷

[158] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[159] *“No se cuenta con un mecanismo de capacitación para funcionarios públicos en torno a las normas sobre uso de fondos públicos, materia en la que el Estado tiene una tarea pendiente por implementar. El nuevo Plan Nacional Anticorrupción plantea que se tendrá un programa de capacitación en temas anticorrupción para el año 2010”.*⁴⁸

[160] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida *d)* de la recomendación anterior, en lo atinente a la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la elaboración del Proyecto de Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025 sobre Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público y del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades, sin entrar a efectuar un análisis del fondo de sus respectivos contenidos. El Comité toma nota, además, de la necesidad de que éste continúe dando atención a la implementación de la misma, para lo cual espera que puedan superar las dificultades que para su implementación ha puesto de presente en su respuesta.^x

[161] Con respecto a la medida *f)* de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda, de la

45 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 25, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

46 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 22, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

47 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 25, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

48 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 20, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

cual el Comité destaca, como un paso que le permite estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, la siguiente medida:

[162] ▪ La ampliación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) a 97% de las Entidades existentes en el Perú.⁴⁹

[163] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida f) de la recomendación anterior.

[164] En relación con la medida g) de la recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[165] *“Sobre la posibilidad de otorgar a los ciudadanos en general la facultad que actualmente tienen los participantes en un proceso de selección para formular consultas y observaciones a las Bases, tras haberse analizado el tema al interior de la Comisión encargada de elaborar los proyectos de la nueva ley y su Reglamento, y teniendo en cuenta aspectos culturales y experiencias negativas recientes, se concluyó que no convenía abrir dicha posibilidad, menos aún en un contexto en que lo que se desea es agilizar las contrataciones públicas eliminando cualquier aspecto que pueda obstaculizar o dilatar innecesariamente un proceso. En tal sentido, la facultad de formular consultas y observaciones a las Bases sigue estando limitada a los participantes en un proceso de selección, es decir a quienes al estar interesados luego de revisar las Bases publicadas junto a la convocatoria en el SEACE, se han inscrito para participar. En todo caso, se ha dejado para más adelante el estudio de abrir tal posibilidad a los gremios representativos del sector privado”.*⁵⁰

[166] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida g) de la recomendación anterior.

[167] Asimismo, debido a que la respuesta de la República del Perú al Cuestionario no se refirió a las medidas e),⁵¹ h) e i) de la recomendación anterior, el Comité toma reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a su implementación.

[168] Por otra parte, con respecto a la implementación de las medidas e) e i) de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[169] - En relación con la medida e):

[170] *“El Estado no ha realizado una evaluación de dichos instrumentos legales ni tampoco se contempla dicha tarea, de modo explícito, en el nuevo Plan Nacional Anticorrupción”.*⁵²

49 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 37, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

50 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 38, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

51. El Estado analizado informó en sus observaciones al proyecto de informe preliminar sobre Perú correspondiente a la tercera ronda de análisis que “en relación a la medida e) debe señalarse que recientemente se ha elaborado un proyecto de Ley sobre el Uso de Bienes Públicos que ha sido puesto en relieve en la presentación del Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República el día 10 de Agosto de los corrientes y que tiene por propósito regular la preservación y uso adecuado de vehículos, ambientes, equipos informáticos, etc a fin de evitar la comisión de posibles actos de corrupción”.

52 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 20, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

[171] - En relación con la medida i):

[172] *“La Ley de Transparencia y Acceso a la Información obliga a todas las entidades públicas a cumplir con esta función, teniéndose aún dificultades para esta materia. Para superarla, el Plan Nacional Anticorrupción plantea, para el 2010, uniformizar los portales de transparencia del Estado y, para el 2011, colocarlos en versiones multilingües y orales”.*⁵³

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

Recomendación 1.3:

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República del Perú para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:⁵⁴

- a) *Reglamentar el Código de Ética de la Función Pública, regulando las sanciones que correspondan por la contravención de sus normas, entre las cuales, las relativas a la obligación de denunciar los actos contrarios a ellas, y precisando la manera en que se aplicarían sus disposiciones en concurrencia con otras normas sobre la materia, procurando que no se vea disminuido su ámbito de aplicación (ver sección 1.3.2 del capítulo II de este informe).*
- b) *Facilitar el cumplimiento de la obligación de denunciar los actos de corrupción, a través de los medios de comunicación e informática que se estimen adecuados, regulando su utilización.*
- c) *Adoptar e implementar medidas de protección para los denunciantes, de tal manera que los mismos encuentren garantías frente a las amenazas o cualquier otro acto de coacción o coerción de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta obligación.*
- d) *Extender las medidas de protección contenidas en la Ley No. 27378 de Diciembre de 2000, en el Decreto Supremo No. 020-2001-JUS de julio de 2001, y en el Decreto Supremo No. 031-2001-JUS de Octubre de 2001, a los denunciantes de buena fe que no han participado en la comisión de los delitos.*
- e) *Capacitar a los funcionarios públicos respecto de la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción de los que tengan conocimiento.*
- f) *Realizar evaluación de la utilización y efectividad de las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos denunciar los actos de corrupción y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en el Perú, como instrumentos para prevenir la corrupción y,*

53 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 21, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

54 Ver páginas 28-30 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.

[173] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda, con respecto a las medidas *c)* y *d)* de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la implementación de las mismas, la siguiente medida:

[174] ▪ La elaboración y presentación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción en Diciembre de 2008, lo cual contiene medidas específicas relacionadas a la protección de los denunciantes de hechos de corrupción en sus puntos 1.1.2 y 3.4.1.⁵⁵

[175] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de las medidas *c)* y *d)* de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la implementación de la misma, para lo cual espera que puedan superar las dificultades que para su implementación ha puesto de presente en su respuesta⁵⁶ y de la información suministrada sobre los organismos internos que han participado en el proceso de implementación de la citada recomendación.⁵⁷

[176] En relación con la medida *e)* de la anterior recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[177] *“En relación a la capacitación debe contemplarse que se trata de una actividad de carácter permanente que deberá ser contemplada por la nueva Autoridad Nacional del Servicio Civil y en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros.*

[178] *Adicionalmente debe señalarse que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ha iniciado, como parte de sus funciones, un programa nacional de capacitación en temas de ética y transparencia dirigida a 2000 funcionarios de todos los niveles gubernamentales, en donde se hace referencia a contenidos procedimentales sobre sanciones a infracciones al Código de Ética de la Función Pública”.*⁵⁸

[179] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida *e)* de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la implementación de la misma.

55 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 26, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

56 Respuesta de la República del Perú al Cuestionario de la Tercera Ronda, p. 27. *“Las principales dificultades encontradas se encuentran en las coordinaciones con el Congreso de la República que han generado una demora en la aprobación de la Ley de Protección al denunciante”.*

57 Respuesta de la República del Perú al Cuestionario de la Tercera Ronda, p. 27. Son ellos: La Presidencia del Consejo de Ministros y la Contraloría General de la República.

58 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 26-27, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

[180] En relación con la medida *f)* de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda que estima está relacionada con la misma.⁵⁹

[181] El Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida *f)* de la recomendación anterior.⁶⁰

[182] Asimismo, debido a que la respuesta de la República del Perú al Cuestionario no se refirió a las medidas *a)*⁶¹ y *b)* de la anterior recomendación, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a su implementación.

[183] Por otra parte, con respecto a la implementación de la medida *b)* de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[184] *“La opción de denunciar los actos de corrupción por vía informática no ha sido habilitada aún por el Estado peruano, lo que hace difícil recibir denuncias de este tipo sin que haya represalias para los posibles denunciantes de la misma”.*⁶²

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCION)

Recomendación 2.1:

Complementar las normas relativas al contenido de la Declaración Jurada y la utilización de ésta en la prevención y combate de la corrupción.

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:⁶³

- a) Complementar las normas sobre el contenido de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, de tal manera que incluyan también la obligación expresa para los declarantes de consignar en las mismas los aspectos relativos a sus “pasivos”, y desarrollar este concepto indicando los elementos que lo componen y la información que debe suministrarse en relación con los mismos (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).*

59 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 27, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

60 El Estado analizado informó en sus observaciones al proyecto de informe preliminar sobre Perú correspondiente a la tercera ronda de análisis que “sobre el particular debe señalarse que en cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción las entidades públicas deben de reportar mensualmente avances en aspectos preventivos y de sanción de la corrupción, con la finalidad de poder hacer reportes y análisis de los mecanismos existentes. Específicamente en relación a los mecanismos y/o medidas para exigir a los ciudadanos denunciar actos de corrupción se ha podido constatar que existen inconvenientes en los procesos o protocolos para efectivizar las denuncias y procesarlas adecuadamente, con esa finalidad y a efectos de tomar medidas correctivas del caso la Presidencia del Consejo de Ministros viene elaborando proyectos normativos que generalicen un procedimiento sobre el particular que supere esta deficiencia encontrada con medidas como por ejemplo denuncias a través de medios informáticos, entre otros”.

61 Ver el Informe Final de la República del Perú de la Segunda Ronda, p. 31, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf.

62. Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 21, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

63. Ver páginas 32-33 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

- b) *Incorporar a las normas sobre las Declaraciones Juradas, la obligación de informar sobre los bienes propios pertenecientes a los dependientes del declarante; a su cónyuge; y a la sociedad de gananciales constituida con su cónyuge o con su conviviente, indicando la procedencia de los mismos.*
- c) *Contemplar, en las Declaraciones Juradas, un rubro en el que se relacionen los cargos o puestos de trabajo que el declarante hubiere ocupado (en la actividad pública o privada) antes de asumir el cargo por el cual está presentando la Declaración; y utilizar dicha Declaración para detectar posibles casos de conflicto de intereses.*
- d) *Incorporar, como obligados a presentar Declaración, a todos los funcionarios públicos encargados de otorgar licencias, al igual que aquellos que formen parte de comisiones o grupos de trabajo en los procesos licitatorios.*

[185] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita, la cual requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda.⁶⁴ En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que la República del Perú dé atención adicional a su implementación.

[186] Por otra parte, con respecto a la implementación de las medidas de la anterior recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[187] - En relación con la medida a):

[188] *“No se contempla aún en la legislación peruana una norma que obligue a los funcionarios públicos a colocar datos sobre sus pasivos o deudas, menos aún que especifiquen en que consisten las mismas”.*⁶⁵

[189] - En relación con la medida b):

[190] *“Las normas sobre declaraciones juradas de funcionarios no contemplan aún esta opción, dejándose a la propia voluntad del funcionario informar sobre este particular. Esta modificación resulta ser indispensable, considerando que varios de los casos de enriquecimiento ilícito vinculados a funcionarios públicos han involucrado a familiares directos de los mismos”.*⁶⁶

[191] - En relación con la medida c):

[192] *“Esta disposición tampoco es contemplada en la legislación peruana. Existen casos de funcionarios públicos que, anteriormente, han laborado, patrocinado o realizado gestión de intereses a favor de empresas a las que ahora tienen que fiscalizar o regular, lo que genera conflictos de intereses potenciales o manifiestos en dichos funcionarios. Esta situación hace indispensable una especificación sobre esta materia. La Declaración solo se refiere a bienes y rentas”.*⁶⁷

64. Ver páginas 33-34 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

65 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 23, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

66 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 23, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

67 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, pp. 23-24, disponible en:

[193] - En relación con la medida d):

[194] “Esta obligación no se ha incorporado en las normas sobre declaraciones juradas, por lo que urge incorporar esta disposición”.⁶⁸

Recomendación 2.2:

Utilizar las Declaraciones Juradas, optimizando el análisis de su contenido, de tal manera que sirvan como una herramienta útil para la detección y prevención de conflictos de intereses, además de su utilización como instrumento idóneo para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito.

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:⁶⁹

- a) *Establecer sistemas para hacer efectiva la verificación del contenido de las Declaraciones Juradas, fijando plazos y ocasiones para ello, y estableciendo acciones que permitan superar obstáculos para acceder a las fuentes de información que se requieran.*
- b) *Implementar un registro de obligados a presentar Declaración Jurada, asegurando los mecanismos para su actualización periódica.*
- c) *Evaluar la posibilidad de trabajar en la implementación de un sistema informático que optimice las funciones de control sobre las Declaraciones Juradas, alertando a las autoridades competentes sobre cambios sustanciales en el contenido de las Declaraciones Juradas del declarante.*

[195] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita, la cual requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda.⁷⁰ En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que la República del Perú de atención adicional a su implementación.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 3:

En vista de los comentarios formulados en dicho aparte, el Comité sugiere que la República del Perú considere fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los párrafos 1, 2, 4, y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas.

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

68 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 24, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

69 Ver páginas 33-34 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

70. Ver páginas 33-34 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

[196] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda con respecto a la anterior recomendación:

[197] *“En relación al órgano de Control Superior, debe tenerse en cuenta los cambios institucionales surgidos tras la desactivación de la Oficina Nacional Anticorrupción en Agosto pasado, que ha otorgado determinadas funciones de esta a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad rectora y responsable del proceso de modernización de la gestión del Estado, el mismo que tiene como uno de sus ejes principales la ética y transparencia en la administración pública”.*

[198] *Esto ha generado que los temas y la política anticorrupción sea orientada desde el mas (sic) alto nivel de la organización del Estado fortaleciéndose canales de coordinación y comunicación con las demás entidades de la administración pública. A partir de entonces se ha presentado el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción que cuenta con siete objetivos que abarca multiplicidad de acciones que están bajo la responsabilidad de diferentes entidades públicas y cuyo horizonte de cumplimiento se extiende hasta el año 2011.*

[199] *Asimismo de mencionarse que en el desarrollo e implementación de este plan se ha propuesto integrar y articular todos los esfuerzos que a la fecha se han venido realizando para luchar contra la corrupción entre ellas las recomendaciones realizadas pro (sic) el Comité de Expertos del MESICIC en su primera y segunda ronda, así como las recomendaciones del Informe de Naciones Unidas relacionadas con el programa Piloto de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”.*

[200] Tal como se ha indicado anteriormente, el Comité toma nota del cambio institucional informado por el País analizado y por la sociedad civil,⁷¹ cuyo resultado ocasiona que la Comisión a la que se refiere tal medida no exista en la actualidad. Sin embargo, teniendo a la vista la información proporcionada por el Estado relacionada con las competencias de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (ver párrafos 138 y 139 *supra*), el Comité estima que esta recomendación ha sido considerada satisfactoriamente.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ART. III, PÁRRAFO 11)

Recomendación 4.1:

De acuerdo con la metodología adoptada por el Comité, en la presente sección no se formulan recomendaciones.

Recomendación 4.2:

Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información pública.

71. Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 20, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:⁷²

- a) *Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las entidades públicas que de acuerdo con las normas sobre derecho a la información están obligadas a hacerlo, incorporen en sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA), el procedimiento para acceder a la información (ver sección 4.2.3 del capítulo II de este informe).*
- b) *Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las entidades públicas que de acuerdo con las normas sobre derecho a la información están obligadas a hacerlo, publiquen en sus portales en Internet la información que de conformidad con dichas disposiciones debe aparecer en tales portales (ver sección 4.2.3 del capítulo II de este informe).*
- c) *Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a la información, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los funcionarios públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología disponible para tal efecto.*
- d) *Realizar una evaluación que permita determinar las causas que podrían estar incidiendo adversamente en la efectividad de la aplicación de las normas sobre el derecho a la información, y como resultado de la misma, adoptar las medidas que permitan superar tales adversidades (ver sección 4.2.3 del capítulo II de este informe).*
- e) *Optimizar el sistema de archivos de las instituciones públicas para facilitar el acceso a la información pública.*
- f) *Fortalecer las garantías previstas para el ejercicio del derecho a la información pública, de tal manera de que el acceso a la misma no pueda ser denegado o limitado por causales diferentes a las que determine la ley o con base en criterios diferentes a los que en ella se establezcan.*
- g) *Analizar la factibilidad de compatibilizar los párrafos 1 y 2 del artículo 18 de la Ley No. 27927 de 2003, respecto de la posibilidad de la Administración Pública de destruir – o no – la información que posea, estableciendo criterios objetivos sobre el concepto de “utilidad pública” contenido en el segundo párrafo del citado artículo.*

[201] En su respuesta,⁷³ el Estado analizado no presenta información adicional a la que ya fue analizada por el Comité en el informe de la Primera Ronda, en relación con la medida a) de la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la misma.

[202] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

72. Ver páginas 35-36 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

73 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 29, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

[203] *“La mayor parte de entidades públicas ha incorporado a sus TUPA el procedimiento para acceder a la información. Se hace necesario un mayor control para verificar si es que todas las entidades estatales han incorporado a estos textos este procedimiento y, sobre todo, si es que la forma en que son presentados es fácil de entender por parte del ciudadano”.*⁷⁴

[204] En relación con la medida b) de la anterior recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[205] *“En cuanto a los portales de transparencia exigidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 27806, en el marco de las modificaciones organizacionales descritas anteriormente se ha dispuesto que la Secretaría de Gestión Pública sea encargada de ejercer rectoría en aspectos relacionados al cumplimiento de la Ley de Transparencia. En este ejercicio de funciones se ha emitido la Directiva N° 004-2008-PCM-SGP “Lineamientos para la Uniformización de portales de Transparencia” que establece criterios y contenidos específicos que faciliten la implementación de los portales de transparencia”.*⁷⁵

[206] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[207] *“La Ley de Transparencia y Acceso a la Información obliga a todas las entidades públicas a cumplir con esta función, teniéndose aún dificultades para esta materia. Para superarla, el Plan Nacional Anticorrupción plantea, para el 2010, uniformizar los portales de transparencia del Estado y, para el 2011, colocarlos en versiones multilingües y orales”.*⁷⁶

[208] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la implementación de la misma.

[209] En relación con la medida c) de la anterior recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[210] *“Asimismo a la fecha se viene desarrollando capacitaciones permanentes dirigidas a funcionarios de todos los niveles de gobierno donde se imparten conocimientos específicos que ayudan a las entidades a cumplir de mejor forma sus obligaciones relacionadas con la transparencia y acceso a la información pública”.*⁷⁷

[211] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la implementación de la misma.

74 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 26, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

75 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 29, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

76. Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 26, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

77. Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 29, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

[212] En relación con la medida *d)* de la anterior recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[213] *“En cuanto a la evaluación que permita analizar causas para el incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe señalarse que esta misma ley dispone que anualmente el Presidente del Consejo de Ministros debe presentar un informe al Congreso de la república donde haga un reporte sobre el cumplimiento de la norma; en cumplimiento de esta disposición la Presidencia del Consejo de Ministros en los últimos años ha venido presentando oportunamente este documento consignando información de todas las entidades públicas y de todos los niveles de gobierno del país. Estos informes presentan información estadística y analítica sobre el acceso a la información así como determina inconvenientes y plantea soluciones a los mismos”.*⁷⁸

[214] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida *d)* de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la implementación de la misma.

[215] En su respuesta,⁷⁹ el Estado analizado no presenta información adicional a la que ya fue analizada por el Comité en el informe de la Primera Ronda, en relación con la medida *f)* de la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la misma.⁸⁰

[216] Asimismo, debido a que la respuesta de la República del Perú al Cuestionario no se refirió a las medidas *e)* y *g)* de la recomendación anterior, el Comité toma reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a su implementación.

[217] Por otra parte, con respecto a la implementación de las medidas *e)* y *g)* de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[218] - En relación con la medida *e)*:

[219] *“Si bien existe un Sistema Nacional de Archivos, no se cuenta con un plan para sistematizar toda la información histórica del Estado que permita facilitar el acceso a la información pública”.*⁸¹

[220] - En relación con la medida *g)*:

[221] *“Sobre esta materia, no existe un proyecto de Ley o iniciativa destinada a compatibilizar estas medidas y que impida la destrucción de información indispensable”.*⁸²

78 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 29, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

79 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 29, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

80 El Estado analizado informó en sus observaciones al proyecto de informe preliminar sobre Perú correspondiente a la tercera ronda de análisis que “(...)en el marco de las capacitaciones en materia de ética, transparencia y acceso a la información que desarrolla la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros se recalcan estos aspectos a los funcionarios participantes”.

81 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 26, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

82 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 27, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

Recomendación 4.3

Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales.

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:⁸³

- a) Establecer procedimientos, cuando corresponda, para permitir la consulta de sectores interesados en relación con el diseño de políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo.*
- b) Extender la práctica de las audiencias públicas o desarrollar otros mecanismos idóneos que permitan consultas públicas en otras áreas adicionales a las que ya estén contempladas.*

[222] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita, la cual requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda.⁸⁴ En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que la República del Perú de atención adicional a su implementación.

[223] Por otra parte, con respecto a la implementación de las medidas de la anterior recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[224] - En relación con la medida a):

[225] *“En contados casos, el Poder Ejecutivo pone a disposición de los ciudadanos sus iniciativas legislativas y proyectos de políticas públicas para que puedan emitir sus opiniones sobre la materia. Esta información es colocada, por lo general, en los portales web de las entidades públicas. Sin embargo, atendiendo a la realidad de un país que cuenta aún con un acceso restringido a Internet, por cuestiones de brechas socioeconómicas, se requieren tener otros mecanismos de información para que la ciudadanía se mantenga informada sobre las mismas. Fue el caso, por ejemplo, del Plan Nacional Anticorrupción. Se requiere, además, de una norma legal que obligue al Poder Ejecutivo a publicar en sus portales electrónicos este tipo de normas e iniciativas de política pública, a fin que la participación de la ciudadanía no quede librada al libre albedrío de las autoridades”.*⁸⁵

[226] - En relación con la medida b):

[227] *“No se ha contemplado modificación legal alguna para extender este mecanismo o generar otros para las áreas en las que no se encuentren obligadas a hacerlo. Solo se puede registrar como*

83 Ver página 36 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

84 Ver página 36 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

85 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 27, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

*avance las audiencias públicas efectuadas en el Congreso de la República sobre temas de interés público o iniciativas legislativas, pero que no es obligatorio para todas las normas”.*⁸⁶

Recomendación 4.4:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que avanzar hacia la derogación de normas que puedan desestimular dicha participación.

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:⁸⁷

- a) Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia pública sobre el problema; y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su utilización.*
- b) Realizar una evaluación de las normas sobre derechos de participación de los ciudadanos contenidas en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, a efectos de detectar la existencia de previsiones que pudieran estar influyendo adversamente en la efectividad de tales derechos y de introducir los ajustes que se estimen pertinentes (ver sección 4.4.2 del capítulo II de este informe).*
- c) Avanzar en la derogación de las denominadas “leyes de desacato” (ver sección 4.4.2 del capítulo II de este informe).*

[228] En su respuesta,⁸⁸ el Estado analizado no presenta información adicional a la que ya fue analizada por el Comité en el informe de la Primera Ronda, en relación con la medida *a)* de la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la misma.

[229] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[230] “El Plan Nacional Anticorrupción contempla que se adopten las siguientes medidas: -Promover la formación de veedurías ciudadanas y comités de vigilancia de la sociedad civil que garanticen el derecho a la información y la obligación del Estado de brindarla: se emitirá la normatividad en 2009 y se mejoraría el acceso a la información pública en 2010;- Sistemas eficientes de supervisión, control y sanción que velen por el cumplimiento de la normatividad existente en materia de acceso a la información pública: el sistema se implementaría en 2010; - Se establecen oficinas de sugerencias y denuncias ciudadanas en todas las capitales de departamento del país, mediante convenios con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, en las cuales se establecerá un procedimiento claro y sencillo para su presentación y tramitación: los convenios se

86 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 28, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

87 Ver página 37 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

88 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 30, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

*firmarían en 2009 y el sistema se implementaría en 2010; - Se promueve la creación de organizaciones sociales de vigilancia en entidades públicas: Se promoverá desde el año 2009;- Se establecen premios anuales para instituciones, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil, o para las personas individuales más destacadas, en la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética pública: Se plantea realizar premio para el año 2009”.*⁸⁹

[231] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida *b)* de la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la misma.⁹⁰

[232] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la medida *c)* de la anterior recomendación.⁹¹ Sin embargo, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” presenta la siguiente información objetiva que le permite al Comité estimar que dicha medida ha sido considerada satisfactoriamente:

[233] “Mediante Ley N° 27975, publicada el 29 de mayo de 2003, fue derogado el artículo 375° (sic) del Código Penal, que contemplaba el delito de desacato en el ordenamiento jurídico peruano. Con ello, se cumple esta recomendación”.⁹²

[234] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida *c)* de la recomendación anterior, en lo atinente a la derogación del artículo 374 del Código Penal, mediante la Ley N° 27975 de 2003, sin entrar a efectuar un análisis del fondo de su contenido.

Recomendación 4.5:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:⁹³

- a) Realizar una evaluación de las normas sobre derechos de control de los ciudadanos contenidas en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, a efectos de detectar la existencia de previsiones que pudieran estar influyendo adversamente en la efectividad de tales derechos y de introducir los ajustes que se estimen pertinentes (ver sección 4.5.2 del capítulo II de este informe).*

89 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 28, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

90 El Estado analizado informó en sus observaciones al proyecto de informe preliminar sobre Perú correspondiente a la tercera ronda de análisis que “en relación a la recomendación *b)* debe señalarse que en el mes de Junio el Estado Peruano ha suscrito la Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública la misma que establece un conjunto de lineamientos y orientaciones para la implementación de políticas públicas sobre la materia. En ese sentido y en el marco de la implementación de este instrumento internacional y del Plan Nacional para la implementación de las recomendaciones del MESICIC se tiene previsto realizar una evaluación de los mecanismos y procedimientos con los que cuenta el Estado peruano en materia de participación ciudadana”.

91 El Estado analizado informó en sus observaciones al proyecto de informe preliminar sobre Perú correspondiente a la tercera ronda de análisis que “en el reporte de avance de la Reunión VIII del Comité de Expertos del MESICIC se ha dejado expresa constancia de la derogatoria de las denominadas “leyes de desacato” a través de la Ley N° 27975 que recomienda la modificación del Código Penal”.

92 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 29, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

93 Ver página 38 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

- b) Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para utilizar tales mecanismos.*

[235] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la medida *a)* de la misma, las siguientes medidas:

[236] *“En el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Comité de Expertos del MESICIC se ha contemplado la realización de un estudio específico sobre el particular quedando pendiente de ejecución. No obstante debe señalarse que se han generado importantes debates en torno a los alcances de la legislación actual y en especial de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, habiéndose incluso generado modificaciones recientes a la norma como por ejemplo la Ley 29313 del mes de Enero de este año ”.*^{94 95}

[237] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[238] *“El Estado no ha realizado una evaluación de dichos instrumentos legales ni tampoco se contempla dicha tarea, de modo explícito, en el Plan Nacional Anticorrupción”.*⁹⁶

[239] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida *a)* de la recomendación, en lo atinente a la aprobación de la Ley N° 29313 de 2009, la cual reglamenta el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a alcaldes, regidores, presidentes regionales, vicepresidentes regionales, consejeros regionales y jueces de paz que provengan de elección popular, sin entrar a efectuar un análisis del fondo de su contenido. El Comité toma nota, además, de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

[240] - En relación con la medida *b)* de la recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[241] *“En cuanto a capacitaciones para difundir estos mecanismos, en los últimos años se han generado diversas iniciativas orientadas a fortalecer capacidades en la sociedad civil con el objetivo de promover el adecuado ejercicio de los derechos de participación y control, a través de alianzas de la cooperación internacional con entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civil.*

[242] *Así por ejemplo se encuentra el Proyecto Comun@s que con la cooperación de USAID está trabajando con 84 distritos rurales aspectos relacionados a transparencia, acceso a la información y ejercicio efectivo de derechos. Otro esfuerzo importante es el “Proyecto de Gobernabilidad y*

⁹⁴ Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 31, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

⁹⁵ El Estado analizado informó en sus observaciones al proyecto de informe preliminar sobre Perú correspondiente a la tercera ronda de análisis que “*además debe resaltarse que esta acción es concordante con las medidas orientadas a implementar la Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública de reciente suscripción por el Estado Peruano (...)*”.

⁹⁶ Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 29, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

Transparencia a través de la mejora de la efectividad en calidad y cobertura de los servicios públicos básicos” en el que participan organismos no gubernamentales como PRISMA, la Universidad ESAN y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza que tiene como un componente específico la formación y fortalecimiento de capacidades de gestión pública para el desarrollo social, regional y local, orientado a funcionarios y sociedad civil con una cobertura de 121 provincias y 638 distritos en 14 regiones del país a lo largo de los próximos cinco años.

[243] *También debe resaltarse que en el marco del Plan Umbral Cuenta del Milenio se ha emprendido un ambicioso programa de cooperación que tiene como uno de sus pilares la lucha contra la corrupción, en el que participa la Defensoría del Pueblo para impulsar la veeduría ciudadana, siendo uno de sus componentes la labor con organizaciones sociales que permitan el mejor ejercicio de sus derechos relacionados con la marcha de la gestión pública a efectos de evitar posibles actos de corrupción”.*⁹⁷

[244] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[245] *“El Plan Nacional Anticorrupción señala que durante este año se deberá cumplir con esta meta, dado que se promoverán organizaciones sociales de vigilancia en las entidades públicas”.*⁹⁸

[246] El Comité toma nota de los pasos dados por Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 5.1:

Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.

[247] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita, la cual requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda.⁹⁹ En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que la República del Perú de atención adicional a su implementación.¹⁰⁰

97 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 31, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

98 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 29, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

99 Ver página 38 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

100 El Estado analizado informó en sus observaciones al proyecto de informe preliminar sobre Perú correspondiente a la tercera ronda de análisis que “se debe señalar que los principales esfuerzos en esta materia están vinculados a mecanismos de cooperación multilateral. Así tenemos que el Perú es uno de los países promotores del Programa Piloto de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción teniendo aprobado su informe de evaluación. Asimismo durante este año y el próximo va tener a su cargo la presidencia del Grupo Anticorrupción de la Comunidad Andina de Naciones. También participa en el Grupo Anticorrupción y Transparencia del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC y a la fecha ha solicitado su adhesión a la Convención Antisoborno de la OCDE”.

[248] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[249] *“Para el año 2010, Perú promoverá la creación de la Organización Interamericana de Instituciones de Compras Gubernamentales (OIICG), con personería jurídica de derecho internacional. Asimismo, durante el año 2009, de acuerdo con el Plan Nacional Anticorrupción, el Estado está obligado a informar sobre activos recuperados y promover la suscripción de convenios internacionales de colaboración en la lucha contra la corrupción”*.¹⁰¹

Recomendación 5.2:

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por la República del Perú. Asimismo se recomienda capacitar a los funcionarios competentes para lograr la más amplia cooperación técnica y legal recíproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.

[250] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda que estima está relacionada con esta recomendación.¹⁰²

[251] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[252] *“No se cuenta con un mecanismo de capacitación para funcionarios públicos sobre los mecanismos de asistencia recíproca en materia anticorrupción, materia en la que el Estado tiene una tarea pendiente por implementar. El Plan Nacional Anticorrupción plantea que se tendrá un programa de capacitación en temas anticorrupción para el año 2010”*.¹⁰³

[253] El Comité toma nota de la necesidad de que la República del Perú dé atención adicional a la implementación de la recomendación anterior.

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

[254] El Comité no le formuló recomendaciones al Estado analizado en relación con esta disposición de la Convención, por cuanto registró con satisfacción que la República del Perú dio cumplimiento al Artículo XVIII de la misma, al designar al Ministerio de Justicia como autoridad central para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en la Convención.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación 7.1:

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos

101 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 29, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

102 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 31-32, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

103 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 29, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

[255] - En relación con la Recomendación 7.1, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente en relación a capacitaciones:

[256] *“(...) el Proyecto Comun@s que con la cooperación de USAID está trabajando con 84 distritos rurales aspectos relacionados a transparencia, acceso a la información y ejercicio efectivo de derechos. Otro esfuerzo importante es el “Proyecto de Gobernabilidad y Transparencia a través de la mejora de la efectividad en calidad y cobertura de los servicios públicos básicos” en el que participan organismos no gubernamentales como PRISMA, la Universidad ESAN y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza que tiene como un componente específico la formación y fortalecimiento de capacidades de gestión pública para el desarrollo social, regional y local, orientado a funcionarios y sociedad civil con una cobertura de 121 provincias y 638 distritos en 14 regiones del país a lo largo de los próximos cinco años.*

[257] *También debe resaltarse que en el marco del Plan Umbral Cuenta del Milenio se ha emprendido un ambicioso programa de cooperación que tiene como uno de sus pilares la lucha contra la corrupción, en el que participa la Defensoría del Pueblo para impulsar la veeduría ciudadana, siendo uno de sus componentes la labor con organizaciones sociales que permitan el mejor ejercicio de sus derechos relacionados con la marcha de la gestión pública a efectos de evitar posibles actos de corrupción”.*¹⁰⁴

[258] El Comité toma nota de los pasos dados por Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

Recomendación 7.2:

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.

[259] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita, la cual requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda.¹⁰⁵ En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que la República del Perú de atención adicional a su implementación.

[260] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa, entre otros, lo siguiente:

¹⁰⁴ Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 31, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm

¹⁰⁵ Ver página 39 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

[261] *“Hasta el momento, el Estado peruano no ha implementado directamente mecanismos que permitan hacer un monitoreo completo del cumplimiento de las obligaciones de la Convención y que ayuden a comunicar al Comité los avances realizados en esta materia. Tampoco lo ha hecho en base a los anteriores informes.*

[262] *Sin embargo, el 17 de marzo de 2009, la Presidencia del Consejo de Ministros instaló la Comisión de Alto Nivel encargada de proponer medidas para la ejecución efectiva del Plan Nacional contra la Corrupción, cuyas medidas responden a varias de las recomendaciones del Comité (...)*

[263] *Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 051-2009-PCM, del 31 de enero de 2009, se aprobó la Guía para la Elaboración del informe mensual de avances en la aplicación de medidas contra la corrupción y para la resolución de denuncias”, que será otro mecanismo de seguimiento sobre esta materia”.*¹⁰⁶

Recomendación 7.3:

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

[264] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita, la cual requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda.¹⁰⁷ En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que la República del Perú de atención adicional a su implementación.

[265] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[266] *“Hasta el momento, el Estado peruano no ha implementado mecanismos que permitan hacer un monitoreo completo del cumplimiento de las obligaciones de la Convención y que ayuden a comunicar al Comité los avances realizados en esta materia.*

[267] *Sin embrago, (sic) al igual que en el punto anterior, debe tenerse presente que el 17 de marzo de 2009, la Presidencia del Consejo de Ministros instaló una Comisión de Alto Nivel encargada de proponer medidas para la ejecución efectiva del Plan Nacional contra la Corrupción. De igual manera debe mencionarse la aprobación de la antes citada Resolución Ministerial N° 051-2009-PCM”.*^{108 109}

106 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, pp. 30-31, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

107 Ver página 39 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

108 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 31, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

109 El Estado analizado informó en sus observaciones al proyecto de informe preliminar sobre Perú correspondiente a la tercera ronda de análisis que *“debe mencionarse que la referida Comisión de Alto Nivel encargada de proponer medidas para la ejecución efectiva del Plan Nacional Contra la Corrupción, se constituyó como un cuerpo ministerial presidido por el Presidente del Consejo de Ministros encargado de monitorear el avance de las medidas del referido plan. Asimismo esta comisión cuenta con un grupo de trabajo compuesto por representantes de todos los sectores ministeriales y entidades de la sociedad civil que se encargan de realizar actividades permanentes que den cuenta de los avances en la implementación del plan”.*

SEGUNDA RONDA

[268] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República del Perú en el informe de la Segunda Ronda, con base en la información que ha tenido a su disposición, lo siguiente:

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos

Recomendación 1.1.1.:

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos.

Medidas sugeridas por el Comité:

- a) Desarrollar la Ley No. 28175 (Ley Marco del Empleo Público), tomando en consideración las iniciativas legales existentes, con la finalidad de desarrollar suficientemente la estructura del sistema de carrera administrativa, así como las disposiciones referentes a los procesos de selección para el ingreso al empleo público basado en los principios de mérito e igualdad, estableciendo las etapas, plazos, órganos competentes, medios de divulgación y la impugnación de las bases del concurso.*
- b) Conformar el Consejo Superior del Empleo Público, ente rector del empleo público.*

[269] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información con respecto a la implementación de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la medida a) de la misma, las siguientes medidas:

[270] *“Formando parte de SERVIR [Autoridad Nacional del Servicio Civil], la Gerencia de Políticas de Gestión de Recursos Humanos (GPGRH) es el órgano encargado de formular las propuestas normativas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. A la fecha viene trabajando en la identificación y compilación del universo de normas del servicio civil, identificación y compilación que nos llevará en un primer momento a la elaboración de un Texto Único Ordenado de las normas del Servicio Civil que ordene y oriente el empleo público en sus principales aspectos (requisitos para el acceso al empleo público, mecanismos de acceso, características de la carrera pública, promociones en la carrera y término de la misma, etc.) y que en un segundo momento nos llevará a la presentación de un proyecto de Ley del Servicio Civil que regule, los procesos de selección para el ingreso al sector público, sobre la base a criterios de mérito e igualdad. De esta manera, SERVIR buscar asegurar el principio de igualdad de oportunidad de ingreso en el sector público”.*¹¹⁰

[271] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

¹¹⁰ Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 33, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

[272] “Esta norma no ha sido desarrollada hasta el momento con una Ley que permita el ingreso a la carrera pública de modo transparente, igualitario y que cumpla con el principio de mérito. Se presentó un proyecto de Ley del Empleo Público, pero que aún se encuentra pendiente de discusión en el Congreso de la República (...)”.¹¹¹

[273] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida *a)* de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

[274] Con respecto a la medida *b)* de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado presenta información, de la cual el Comité destaca, como un paso que le permite estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, la siguiente medida:

[275] ▪ La creación, a través del Decreto Legislativo N° 1023 del 21 de Junio del 2008, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado.¹¹²

[276] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida *b)* de la recomendación anterior, sin entrar a efectuar un análisis del fondo del contenido de la citada norma.

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado

Recomendación 1.2.1.:

Fortalecer los procedimientos de contratación por vía de la licitación pública y por concurso de ofertas.

Medidas sugeridas por el Comité:

- a) Establecer la facultad de la entidad de terminar el contrato unilateralmente o de reservarse el derecho de otorgar la buena pro, conforme corresponda, cuando se verifique la existencia de vicios en el proceso tales como la sobrevaloración del contrato o en los casos de colusión entre empresas participantes, así como la facultad de la entidad, en tales casos, de reiniciar el proceso de selección para la adquisición de bienes o servicios de acuerdo a las reglas generales o adjudicar y contratar con el segundo proveedor mejor evaluado del proceso en cuestión, en la medida que éste cumpla con los requerimientos establecidos en las Bases para la ejecución del contrato.*
- b) Modificar el Artículo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo No. 084-2004-PCM) a fin de establecer como requisito para las adquisiciones y contrataciones exoneradas, la invitación de dos o más proveedores registrados que cumplan los requisitos establecidos en las bases, salvo la contratación de servicios personalísimos o cuando exista un solo proveedor en el mercado nacional, en los casos de bienes o servicios que no admiten sustitución.*

111 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 31, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

112 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 33, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

- c) *Considerar medidas para atenuar la variabilidad existente entre los valores programados en los planes anuales de contrataciones y adquisiciones y los efectivamente ejecutados por las distintas entidades.*
- d) *Evaluar y adecuar el sistema de contrataciones y adquisiciones públicas de tal modo que la licitación pública constituya efectivamente la regla general para la selección de los procedimientos de contratación en el sistema estatal de adquisiciones de bienes y servicios, tomando en cuenta la diversidad de necesidades y alcances presupuestarios de las entidades y organismos del Estado.*

[277] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información con respecto a la implementación de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la medida a) de la misma, las siguientes medidas:

[278] *“Como marco general debe tenerse en consideración que recientemente el Perú ha modificado sus normas de contratación a través de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento Decreto legislativo 1017 y Decreto Supremo N° 184-2008-EF.*

[279] *De acuerdo a lo establecido en el artículo 56 (segundo párrafo) de esta nueva norma, el Titular de la Entidad contratante deberá declarar la nulidad de un proceso de selección cuando verifique la existencia de vicios tales como la sobrevaloración del contrato o de colusión entre empresas participantes, entre otros supuestos contenidos en las causales previstas, sólo hasta antes de la celebración del contrato; una vez suscrito el contrato, la Entidad sólo puede declarar la nulidad del proceso (y del contrato) si se verifica que el contratista estaba impedido para contratar con el Estado o que ha transgredido el principio de presunción de veracidad, también cuando se suscribió el contrato sin haber mediado un proceso de selección o encontrándose en trámite un recurso de apelación.*

[280] *Asimismo, en el primer párrafo del citado artículo 56 se establece que en la resolución de nulidad debe expresarse la etapa a la que se retrotraerá el proceso; en tal sentido, si el efecto de la nulidad es la descalificación del postor ganador, corresponderá adjudicar el contrato al que le sigue en el orden de prevalencia. Por su parte, el artículo 44 de la Nueva Ley establece que si un contrato de obra es resuelto, el saldo por ejecutar podrá ser entregado al postor que ocupó el segundo lugar en el proceso de selección o a otra Entidad, o ser culminado por la propia Entidad, de acuerdo a lo que más convenga. Tras la resolución de un contrato de bienes o de servicios, no corresponderá adjudicar el contrato al proveedor que ocupó el segundo lugar sino volver a convocar a un proceso de selección del tipo correspondiente al monto (total o parcial) por ejecutar”.*¹¹³

[281] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida a) de la recomendación anterior, sin entrar a efectuar un análisis del fondo del contenido de las citadas normas.

[282] - En relación con la medida b) de la recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[283] *En relación a la segunda medida sugerida debe tenerse en cuenta el segundo párrafo del artículo 135 del nuevo Reglamento (148 del anterior), por el cual una exoneración se circunscribe a la omisión del proceso de selección (segunda fase del procedimiento de contratación), por lo que los actos*

113 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 34-35, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

*preparatorios y contratos que se celebren como consecuencia de aquella (primera y tercera fase, respectivamente), deben cumplir con los respectivos requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías que se aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso de selección correspondiente. En este sentido, se ha establecido en el artículo 12 del Nuevo Reglamento que, en el estudio o evaluación de las condiciones que ofrece el mercado que obligatoriamente debe realizarse entre los actos preparatorios, debe emplearse como mínimo dos (2) fuentes. Consecuentemente, la invitación a la que hace referencia el artículo 135 (antes 148), debe entenderse que se hará al proveedor que represente la mejor alternativa”.*¹¹⁴

[284] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida *b)* de la recomendación anterior, sin entrar a efectuar un análisis del fondo del contenido de las citadas normas.

[285] - En relación con la medida *c)* de la recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[286] *“Con la finalidad de atenuar la variabilidad existente entre los valores programados en los Planes Anuales de Contrataciones (PAC) y los efectivamente ejecutados, la nueva normativa establece algunas consideraciones que se orientan al cumplimiento de este aspecto:*

[287] • *Reducción del plazo de aprobación y publicación del PAC, de 30 a 15 días hábiles, desde que es aprobado el presupuesto institucional (Artículo 8 del Nuevo Reglamento).*

[288] • *Obligación de consignar en el PAC, la fecha ‘prevista’ de la convocatoria (Artículo 7 del Nuevo Reglamento), en vez de la fecha “probable” de la convocatoria (Artículo 23 del Reglamento anterior).*

[289] • *Obligación del Titular de la Entidad de evaluar semestralmente la ejecución del PAC, debiendo adoptar las medidas correctivas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos previstos por la institución”.*¹¹⁵

[290] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida *c)* de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que será necesario analizar los resultados de la nueva normativa para verificar si la misma ha contribuido para atenuar la variabilidad entre los valores programados en los planes anuales de contrataciones y adquisiciones y los efectivamente ejecutados por las distintas entidades.

[291] - En relación con la medida *d)* de la recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[292] *“En cuanto a la medida sugerida d) debe tenerse en cuenta que Independientemente de las denominaciones que reciben los distintos tipos de procesos de selección reconocidos por la normativa peruana de contratación pública, a partir de lo establecido en el artículo 52 del Nuevo Reglamento, todos los procesos de selección, sin excepción, serán públicos y abiertos, posibilitando la participación*

114 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 34-35, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

115 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 35, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

de cualquier proveedor (nacional o extranjero) que, a raíz de haber tomado conocimiento a través del SEACE de las reglas de un proceso de selección, se encuentre interesado en presentar su propuesta en el mismo. Anteriormente, dicha condición no la tenían las adjudicaciones directas selectivas y las adjudicaciones de menor cuantía, sino un régimen semi-cerrado, dado que sólo podían participar en ellas aquellos proveedores que habían sido invitados y también las PYMEs que lo deseen, atendiendo a la invitación que indirectamente se les había cursado a éstas a través de la notificación de la convocatoria a PROMPYME (Agencia de Promoción de la Pequeña y Microempresa).

[293] *Por otro lado, considerando que muchas entidades en el Perú —sobre todo municipalidades distritales muy pequeñas y las Sociedades de Beneficencia Pública— realizan únicamente adjudicaciones de menor cuantía, no es posible establecer que este tipo de procesos de selección tendrán un tope de 15% del presupuesto de cada unidad ejecutora.*

[294] *En todo caso, las únicas excepciones a la referida regla general están dadas por los supuestos de exoneración expresamente reconocidos en el artículo 20 de la Nueva Ley, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la normativa, incluyendo la emisión de una resolución firmada por el Titular de la Entidad, facultad que es indelegable”.*¹¹⁶

[295] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[296] *“El Decreto Legislativo N° 1017, que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, señala que hay dos procedimientos centrales para la contratación: la licitación pública, para la contratación de bienes, suministros y obras y el concurso público, para la contratación de servicios. Como excepciones a esta regla, se encuentra la adjudicación directa, para las contrataciones que realice cada Entidad, dentro del margen dado por la Ley de Presupuesto y la adjudicación de menor cuantía, para aquellas contrataciones cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para los casos de licitación pública y concurso público. Se señala, además, que la adjudicación de menor cuantía se realizará de modo electrónico y, paulatinamente, los demás tipos de contratación se harán de esta manera”.*¹¹⁷

[297] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida d) de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que será necesario analizar los resultados de la nueva normativa para verificar si la licitación pública constituye efectivamente la regla general para la selección de los procedimientos de contratación en el sistema estatal de adquisiciones de bienes y servicios.

Recomendación 1.2.2.:

Fortalecer los mecanismos de control del Sistema de Contrataciones del Sector Público.

¹¹⁶ Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 35, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

¹¹⁷ Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 33, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

Medida sugerida por el Comité:

- *Revisar las sanciones establecidas en el Artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo No. 084-2004-PCM) con la finalidad de establecer un plazo razonable para la inhabilitación temporal de los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las causales allí establecidas, así como revisar la asignación de sanciones a las demás infracciones allí señaladas, de manera a establecer sanciones acordes con la gravedad de la infracción.*

[298] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información con respecto a la implementación de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, las siguientes medidas:

[299] *“En primera instancia, las disposiciones contenidas en el artículo 294 del Reglamento anterior, referido a las causales de imposición de sanción a proveedores, postores y contratistas, tienen ahora rango legal; es decir, están siendo reconocidas en el Artículo 51 de la Nueva Ley. Adicionalmente, con la finalidad de establecer plazos razonables de inhabilitación temporal acordes con la gravedad de las infracciones cometidas, la pena mínima a imponerse a sido elevada de tres (3) a seis (6) meses, así como también la pena máxima, de dos (2) a tres (3) años”.*¹¹⁸

[300] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida de la recomendación anterior, sin entrar a efectuar un análisis del fondo del contenido de la citada norma.

Recomendación 1.2.3.:

Ampliar la utilización de medios electrónicos y de los sistemas de información para la contratación pública.

Medidas sugeridas por el Comité:

- a) *Establecer la obligación de hacer públicas las decisiones que autoricen ajustes en los contratos, a través de medios electrónicos u otros medios de información.*
- b) *Dar seguimiento a la expansión del SEACE dirigida a cubrir todas las entidades bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.*

[301] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información con respecto a la implementación de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la medida a) de la misma, las siguientes medidas:

[302] *“A fin de establecer la obligación de hacer públicas las decisiones que autoricen ajustes en los contratos, el artículo 45 de la Nueva Ley exige que, bajo responsabilidad, las Entidades deberán registrar en el SEACE todos los actos realizados en cada proceso de selección que convoque, los contratos suscritos y su ejecución; por su parte, en el artículo 287 del Nuevo Reglamento establece que el detalle del contenido de la información que deberá reportarse a través del SEACE será establecida en una Directiva emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE, antes CONSUCODE). A la fecha de elaboración del presente informe, la referida Directiva se encuentra en*

¹¹⁸ Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 36, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

preparación; sin embargo, ha sido posible conocer que, entre la información exigida, se encuentra aquella referida a los ajustes que sufra el monto originalmente contratados, ya sea a raíz de prestaciones adicionales, reducciones, penalidades o de la resolución parcial del contrato.

[303] *Complementariamente, el segundo párrafo del citado artículo 287 del Nuevo Reglamento prescribe que la obligatoriedad de publicidad en el SEACE incluye las contrataciones que realicen las Entidades, con sujeción a regímenes especiales o a través de convenios nacionales e internacionales”.*¹¹⁹

[304] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida *a)* de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que aún falta que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emita la Directiva a que se refiere el artículo 287 del Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado.

[305] - En relación con la medida *b)* de la recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[306] *“En relación a la ampliación de la cobertura del SEACE, se tiene que 2670 de las 2746 (el 97%) de las Entidades existentes en el Perú, han hecho uso del SEACE durante el año 2008; en todo caso, las 76 entidades faltantes están constituidas por municipalidades distritales muy pequeñas y por sociedades de beneficencia pública cuyas compras son muy pequeñas y no se encuentran bajo los alcances de la normativa sobre contratación pública. De manera adicional, cabe señalar que, para el año 2009, ninguna Entidad ha hecho uso de la posibilidad de eximirse del uso del SEACE, de acuerdo a lo establecido en la Segunda Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley aún vigente (Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Nuevo Reglamento)”.*¹²⁰

[307] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida *b)* de la recomendación anterior teniendo en cuenta que la información disponible en el informe de la Segunda Ronda indica que, en aquella oportunidad, el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) cubría a 2.242 entidades, lo que correspondía a 82,8% del total de Entidades que conforman el sector público del Perú.¹²¹

Recomendación 1.2.4.:

Complementar el régimen de contratación de obras públicas contenido en el Decreto Supremo No. 083-2004-PCM y en su Reglamento.

Medidas sugeridas por el Comité:

a) Contemplar la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de obra pública en particular que, teniendo en cuenta su naturaleza, importancia y/o magnitud, permitan adelantar veedurías cívicas o actividades de control ciudadano e impongan el deber de rendir periódicamente cuentas sobre el desarrollo del contrato.

119 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 36, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

120 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 37, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

121 Ver página 11 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_per.pdf

b) Estudiar la posibilidad de otorgar a los ciudadanos en general la facultad que actualmente tienen los postores para formular consultas y observaciones a las Bases de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley.

c) Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, prepliegos de la licitación para que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones con relación a los mismos.

[308] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información con respecto a la implementación de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la medida a) de la misma, las siguientes medidas:

[309] *“Si bien la alta dirección del OSCE ha contemplado la implementación de veedurías ciudadanas como un sistema de control adicional de las contrataciones estatales, la existencia de una nueva normativa determina que se deba iniciar un programa intensivo de capacitación sobre la aplicación de la misma, en el cual se promoverá la participación de ciudadanos y agentes de la sociedad civil que deseen o deban intervenir en calidad de observadores en los procesos de licitaciones para la ejecución de obras de mayor cuantía. En otros términos, si bien la medida no ha sido aún implementada, dentro de los planes de la nueva institución rectora de las contrataciones públicas en el Perú, se encuentra tanto la conformación de veedurías ciudadanas en cada institución pública, como la invitación a organizaciones de la sociedad civil e instituciones autónomas a participar como observadores en procesos de mayor cuantía.*

[310] *Sin perjuicio de lo señalado, en concordancia con las funciones asignadas al nuevo organismo (Artículo 58 de la Nueva Ley: supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de contratación que se realicen al amparo de esta ley y su reglamento, y suspender los procesos de contratación, y poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, cuando observe transgresiones a la normativa, siempre que existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de Comisión de delito, entre otras), dentro de la estructura del OSCE (Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2009-EF, publicado el 14 de enero de 2009 en el Diario Oficial El Peruano), será implementada una nueva área (Dirección de Supervisión y Fiscalización) para dar cumplimiento al mayor poder de fiscalización que tendrá este organismo”.*¹²²

[311] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

[312] - En relación con la medida b) de la recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[313] *“Sobre la posibilidad de otorgar a los ciudadanos en general la facultad que actualmente tienen los participantes en un proceso de selección para formular consultas y observaciones a las Bases, tras haberse analizado el tema al interior de la Comisión encargada de elaborar los proyectos de la nueva ley y su Reglamento, y teniendo en cuenta aspectos culturales y experiencias negativas recientes, se concluyó que no convenía abrir dicha posibilidad, menos aún en un contexto en que lo que se desea es agilizar las contrataciones públicas eliminando cualquier aspecto que pueda obstaculizar o dilatar innecesariamente un proceso. En tal sentido, la facultad de formular consultas y observaciones a las*

¹²² Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 37, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

*Bases sigue estando limitada a los participantes en un proceso de selección, es decir a quienes al estar interesados luego de revisar las Bases publicadas junto a la convocatoria en el SEACE, se han inscrito para participar. En todo caso, se ha dejado para más adelante el estudio de abrir tal posibilidad a los gremios representativos del sector privado”.*¹²³

[314] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida b) de la recomendación anterior.

[315] - En relación con la medida c) de la recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[316] *“En cuanto a la publicación de prepliegos en las licitaciones, el artículo 37 del Nuevo Reglamento establece que las Bases aprobadas de un proceso de selección pueden ser prepublicada (sic) en el SEACE y en el portal institucional de la Entidad convocante, precisándose que dicha posibilidad no representa una etapa adicional a las definidas, por lo que cualquier consulta u observación respecto del contenido de las Bases sólo podrán efectuarse en la etapa correspondiente del proceso. Lo que se pretende con la medida es proveer de mayor tiempo a los interesados para el análisis de las Bases y así puedan proponer consultar u observaciones dentro de los plazos establecidos en el cronograma publicado junto con la convocatoria”.*¹²⁴

[317] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que el objetivo de la publicación de los prepliegos es lo de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones con relación a los mismos con anterioridad a la publicación de las Bases.

Recomendación 1.2.5.:

Dar continuidad a la realización de evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y efectividad del sistema de adquisiciones del Sector Público y, con base en sus resultados, definir y considerar la adopción de medidas específicas que permitan asegurar la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del mismo.

[318] En relación con la anterior recomendación, el Estado analizado da cuenta de lo siguiente:

[319] *“El año 2008, con el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno peruano ha llevado a cabo la primera evaluación del sistema peruano de contratación estatal, aplicando los instrumentos de medición diseñados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La evaluación ha contado con la participación no solamente de expertos nacionales e internacionales, sino fundamentalmente de funcionarios representantes de entidades compradoras y de los organismos integrantes del sistema peruano de contratación pública, así como de instituciones representativas de la sociedad civil. Los resultados de la referida evaluación serán publicados próximamente en el portal institucional de OSCE luego de realizarse su presentación oficial ante las autoridades pertinentes. Se ha previsto que, en adelante, esta evaluación se desarrollará periódicamente.*

123 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 38, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

124 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 38, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

[320] Asimismo, desde el año 2007, CONSUCODE, viene elaborando Informes Ejecutivos trimestrales sobre el comportamiento del sistema de contratación estatal, a los cuales se puede acceder a través de la página web de CONSUCODE (<http://www.consucode.gob.pe/opcion.asp?ids=11&ido=68>). Estos Informes contienen datos referidos a la ejecución real de los Planes Anuales de Contrataciones, la demanda según tipos de procesos de selección y las compras de PETROPERU, las diversas modalidades de selección (subasta inversa, compras corporativas y convenios marco, los principales proveedores del Estado, las observaciones e impugnaciones interpuestas, y las exoneraciones aprobadas, entre otros.

[321] Por otro lado, corresponde referir que dentro de la nueva estructura orgánica del OSCE se ha contemplado el fortalecimiento de un área de estudios económicos que tendrá a su cargo el cumplimiento de la función de proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso eficiente de los recursos públicos y de reducción de costos, contenida en el inciso ñ) del artículo 58 de la Nueva Ley”.¹²⁵

[322] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad.

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 2.1.:

Implementar sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.

Medida sugerida por el Comité:

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la Constitución y los principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes aspectos:

- a) Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en sede administrativa o judicial;*
- b) Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose de un funcionario público que denuncie actos de corrupción que puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo;*
- c) Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/u obligaciones en materia de protección;*
- d) Simplificar la solicitud de protección del denunciante;*

¹²⁵ Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 38-39, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

- e) *Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con protección de identidad, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción;*
- f) *Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y las instancias responsables de brindarla;*
- g) *Mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas garantías del funcionario público y el particular;*
- h) *Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las materias anteriores, incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece la Convención, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia mutua.*
- i) *La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema, distinguiendo claramente la una de otra.*

[323] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la implementación de las mismas, la siguiente medida:

[324] ▪ La elaboración y presentación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción en Diciembre de 2008, lo cual contiene medidas específicas relacionadas a la protección de los denunciantes de hechos de corrupción en sus puntos 1.1.2 y 3.4.1.^{126 127}

[325] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[326] *“El Plan Nacional Anticorrupción contempla, para el año 2010, la expedición de una norma que proteja a los denunciantes de hechos de corrupción, la cual no existe hasta este momento. Se tiene el proyecto de Ley 0083/2006-CGR – Ley de Protección al Denunciante, que propone la protección al denunciante de actos de corrupción, que se encuentra pendiente de discusión en el Congreso de la República. Asimismo, el Plan Nacional Anticorrupción contempla que, para el año 2009, se implementará el programa de protección de colaboradores, testigos y peritos”.*¹²⁸

[327] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la implementación de la misma, para lo cual espera que puedan superar las dificultades que para su

126 Ver la respuesta de Perú al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 26 y 40, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_sp.htm.

127 El Estado analizado informó en sus observaciones al proyecto de informe preliminar sobre Perú correspondiente a la tercera ronda de análisis que “Adicionalmente debe señalarse que en la presentación del Presidente (sic) del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República el pasado 10 de Agosto se hizo un llamado expreso a fin de que se tenga que aprobar con prontitud el proyecto de Ley de Protección al Denunciante que se encuentra bajo estudio en el cuerpo legislativo peruano”.

128 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 36, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

implementación ha puesto de presente en su respuesta¹²⁹ y de la información suministrada sobre los organismos internos que han participado en el proceso de implementación de la citada recomendación.¹³⁰

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación a):

Adequar y/o complementar, según corresponda, la legislación penal de tal manera que ésta incluya los elementos de los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención.

[328] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita. En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que la República del Perú dé atención adicional a su implementación.

Recomendación b):

Adequar y/o complementar el Artículo 425 del Código Penal, que se relaciona con la definición de funcionarios y servidores públicos, de tal manera que incluya a quienes hayan sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, aún cuando no hubiesen asumido el cargo o función.

[329] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita. En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que la República del Perú dé atención adicional a su implementación.

[330] Por otra parte, con respecto a la implementación de la anterior recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[331] “Esta norma aún no ha sido modificada ni complementada, lo que hace que esta recomendación no haya sido cumplida hasta el momento”.¹³¹

Recomendación c):

Considerar la publicación, por parte de la Corte Suprema de Justicia, del contenido de las sentencias expedidas como instancia final en materia penal, a través de su sitio web.

[332] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita. En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que la República del Perú dé atención adicional a su implementación.

[333] Por otra parte, con respecto a la implementación de la anterior recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

129 Respuesta de la República del Perú al Cuestionario de la Tercera Ronda, p. 27. “Las principales dificultades encontradas se encuentran en las coordinaciones con el Congreso de la República que han generado una demora en la aprobación de la Ley de Protección al denunciante”.

130 Respuesta de la República del Perú al Cuestionario de la Tercera Ronda, p. 27. Son ellos: La Presidencia del Consejo de Ministros y la Contraloría General de la República.

131 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 37, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

[334] *“Esta recomendación solo se ha cumplido parcialmente, por dos motivos. En primer lugar, solo algunas sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia y por el subsistema anticorrupción han sido publicadas. Y, en segundo lugar, porque su ubicación es difícil, dado que las mismas, salvo contadas excepciones, solo pueden ser identificadas por su número de expediente”*.¹³²

4. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación 4.1.:

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

[335] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita. En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que la República del Perú dé atención adicional a su implementación.

[336] Por otra parte, con respecto a la implementación de la anterior recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[337] *“Como se ha señalado a lo largo de este Informe, una de las tareas pendientes en materia anticorrupción es la capacitación de los servidores públicos para el cumplimiento de las disposiciones de la Convención y del ordenamiento jurídico peruano sobre lucha anticorrupción. La Presidencia del Consejo de Ministros contempla que para el año 2010, en cumplimiento del Plan Nacional Anticorrupción, se contará con un programa completo de capacitación sobre estas materias para los servidores públicos”*.¹³³

Recomendación 4.2.:

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo.

[338] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita. En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que la República del Perú dé atención adicional a su implementación.

[339] Por otra parte, con respecto a la implementación de la anterior recomendación, la organización de la sociedad civil “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)” expresa lo siguiente:

[340] *“Hasta el momento, el Estado peruano no ha implementado mecanismos que permitan hacer un monitoreo completo del cumplimiento de las obligaciones de la Convención y que ayuden a comunicar al Comité los avances realizados en esta materia.*

132 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 37, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

133 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 37, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

[341] *En este punto, debe tenerse presente también, que el 17 de marzo de 2009, la Presidencia del Consejo de Ministros instaló una Comisión de Alto Nivel encargada de proponer medidas para la ejecución efectiva del Plan Nacional contra la Corrupción. De igual manera debe mencionarse la aprobación de la antes citada Resolución Ministerial N° 051-2009-PCM”.*¹³⁴

134 Documento presentado por “Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA)”, p. 38.
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_per_inf_sc_sp.pdf

NOTAS AL FINAL

ⁱ Asimismo, dispone el artículo 2, inciso 10, de la Constitución Política del Perú: “*Toda persona tiene derecho: (...) Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.*”

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal.

Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial”.

ⁱⁱ De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad N° 013-98-EF/93.01, publicada el 23 de julio de 1998, se precisa que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a que se refiere el texto del Artículo 223 de la Ley General de Sociedades comprende, substancialmente, a las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), oficializadas mediante Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad, y las normas establecidas por Organismos de Supervisión y Control para las entidades de su área siempre que se encuentren dentro del Marco Teórico en que se apoyan las Normas Internacionales de Contabilidad.

Las Normas Internacionales de Contabilidad (*International Accountability Standards*, IAS en inglés) son un conjunto de pronunciamientos desarrollados por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (*International Accounting Standards Board (IASB)*) organismo independiente con sede en la ciudad de Londres con financiamiento privado. La IASB ha asumido el compromiso de elaborar, en aras del interés público, un conjunto único de normas internacionales de contabilidad de calidad, comprensibles y que puedan hacerse cumplir que exijan información transparente y comparable en los estados financieros para fines generales. Además, la IASB colabora con los organismos nacionales encargados de dictar normas de contabilidad a fin de lograr la armonización de las normas contables en todo el mundo. (Más información en www.iasb.org).

El listado de las NICs oficializadas vigentes en Perú se encuentra disponible en la siguiente dirección web: <http://cpn.mef.gob.pe/cpn/Libro3/nics/nics.htm>

ⁱⁱⁱ Entre las infracciones leves se destaca la de “*no suministrar, o no hacerlo oportunamente, o presentar en forma incompleta o sin los requisitos establecidos por la normativa, a CONASEV, a la Bolsa, a la bolsa de productos, a la entidad encargada del mecanismo centralizado de negociación o a cualquier otra entidad o sujeto del mercado de valores o productos, la información financiera individual o consolidada auditada, los estados financieros intermedios individuales o consolidados, informe de gerencia, informe adicional de auditoría, hechos de importancia, memorias anuales y en general cualquier otra documentación o información a que se encuentran obligados por la normativa o por requerimiento de CONASEV*” (Anexo I, 3.1).

^{iv} Entre las infracciones graves se destacan la de “*denegar o dilatar la entrega de libros, documentos y demás información requerida por CONASEV durante las inspecciones o investigaciones, no otorgar las facilidades que CONASEV solicite en la ejecución de las acciones de supervisión y control que disponga; así como presentar documentación con el propósito de dilatar el procedimiento, o de cualquier otro modo obstaculizar las acciones de supervisión y control*” (Anexo I, 2.3) y la de “*presentar a CONASEV, a la Bolsa, a la Bolsa de Productos, a la entidad encargada del mecanismo centralizado de negociación, al inversionista y en general a cualquier otro Participante del mercado de valores o de productos, información financiera preparada sin observar las Normas Internacionales de Contabilidad en el Perú, los pronunciamientos técnicos emitidos por la profesión contable del país, normas contables establecidas por los órganos de supervisión y control y las normas contenidas en el Reglamento de Información Financiera*” (Anexo I, 2.13).

^v Entre las infracciones muy graves se destaca la de “*presentar a CONASEV, a la Bolsa, a la Bolsa de Productos, a la entidad encargada del Mecanismo Centralizado, al inversionista y en general a cualquier otro sujeto del mercado de valores o de productos, información inexacta, falsa o tendenciosa; o divulgar dicha información en el mercado. Se incluye la presentación o difusión de documentos cuya traducción no corresponde al sentido correcto de lo expresado en el original*” (Anexo I, 1.4).

^{vi} El artículo 46 del Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores del Perú se refiere a los siguientes actos: a) encubrir un hecho importante a sabiendas que es necesario dejar en forma expresa su opinión, para que induzca a conclusiones erróneas; b) dejar de expresar cualquier dato importante en los estados financieros y/o en sus informes, del cual tenga conocimiento; c) incurrir en negligencia al emitir el informe correspondiente a su trabajo, sin haber observado las normas, técnicas y procedimientos de contabilidad o auditoría exigidos en las circunstancias, para respaldar su trabajo profesional sobre el asunto encomendado o expresa su opinión cuando las limitaciones al alcance de su trabajo son de tal naturaleza que le limiten emitir tal opinión; d) no revelar, siendo de su conocimiento, sobre cualquier desviación sustancial de los principios, normas y procedimientos que regulan el ejercicio de la profesión o de cualquier omisión importante aplicable en las circunstancias; e) inducir a falsear los estados financieros y cualquier otra información de su competencia.

^{vii} El artículo 425 del Código Penal de la República del Perú, modificado por la Ley No. 26713 de 1996, establece que “*Se consideran funcionarios o servidores públicos: 1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. 3. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. 4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 6. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley*”.

^{viii} Dispone el artículo 523 del Nuevo Código Procesal Penal:

“ 1. El arresto provisorio de una persona reclamada por las autoridades extranjeras procederá cuando:

- a) Haya sido solicitada formalmente por la autoridad central del país interesado;
- b) La persona pretenda ingresar al país mientras es perseguido por la autoridad de un país limítrofe;
- c) La persona se encuentre plenamente ubicada, dentro del territorio nacional, con requerimiento urgente, por intermedio de la Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.

(...)

4. El Juez dictará el mandato de arresto provisorio, siempre que el hecho que se repute delictivo también lo sea en el Perú y que tenga prevista una conminación penal, en cualquiera de sus extremos, igual o superior a una pena privativa de un año. Si se invoca la comisión de varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto de los restantes delitos. La decisión que emita será notificada al Fiscal y comunicada a la Fiscalía de la Nación y a la Oficina Local de INTERPOL.

(...)

6. Dispuesto el arresto provisorio, el Juez de la Investigación Preparatoria oír a la persona arrestada en el plazo de veinticuatro horas, y le designará abogado defensor de oficio, si aquél no designa uno de su confianza. El arresto se levantará, si inicialmente, el Juez advierte que no se dan las condiciones indicadas en el numeral 4) de este artículo, convirtiéndose en un mandato de comparecencia restrictiva, con impedimento de salida del país. El arresto cesará si se comprobare que el arrestado no es la persona reclamada, o cuando transcurre el plazo de treinta días para la presentación formal de la demanda de extradición.

7. El arrestado que sea liberado porque no se presentó a tiempo la demanda de extradición, puede ser nuevamente detenido por razón del mismo delito, siempre que se reciba un formal pedido de extradición.

(...)

9. El arrestado puede obtener libertad provisional, si transcurriesen los plazos legales del tratado o de la Ley justificatorios de la demanda de extradición, o si el extraditado reuniese las condiciones procesales para esa medida. En este último caso se dictará mandato de impedimento de salida del país y se retendrá su pasaporte, sin perjuicio de otras medidas de control que el Juez discrecionalmente acuerde. Se seguirá el trámite previsto para la cesación de la prisión preventiva.
(...)”

^{ix} Respuesta de la República del Perú al Cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 22-23: “Debemos recordar que SERVIR tiene aún pocas semanas de haber iniciado sus funciones, encontrándose aun en proceso de implementación respecto a las funciones de las distintas unidades orgánicas de línea de la Autoridad. Asimismo, en materia de recursos humanos, el Estado carece de información sistematizada que permita formular políticas de personal y desarrollo del talento humano, requisitos y competencias mínimas para cada cargo dentro de la administración pública o incluso identificar cuáles son los beneficios o ingresos que perciben los servidores públicos. En consecuencia, las dificultades observadas por la GPGRH para implementar la medida mencionada están relacionadas al reciente inicio de funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR (diciembre 2008), la proliferación y dispersión de normas relacionadas al servicio civil así como seguir con todos los trámites propios de la presentación de una propuesta legislativa al Congreso”.

^x Respuesta de la República del Perú al Cuestionario de la Tercera Ronda, p. 25. “SERVIR tiene aún pocas semanas de haber iniciado sus funciones, encontrándose en proceso de implementación respecto a las funciones de las distintas unidades orgánicas de línea de la Autoridad. Asimismo, en materia de recursos humanos, el Estado carece de información sistematizada que permita formular políticas de personal y desarrollo del talento humano, requisitos y competencias mínimas para cada cargo dentro de la administración pública o incluso identificar cuáles son los beneficios o ingresos que perciben los servidores públicos. En consecuencia, las dificultades observadas por la GPGRH para implementar la medida mencionada están relacionadas al reciente inicio de funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR (noviembre 2008), la proliferación y dispersión de normas relacionadas al servicio civil y la existencia de diferentes regímenes contractuales en la administración pública entre otros”.